Los ODS

como punto de partida
para el fomento de la calidad
del **empleo femenino**

DIRECCIÓN
E. M. Blázquez Agudo

Editorial Dykinson

© 2018 Autoras

Editorial Dykinson
c/ Meléndez Valdés, 61 – 28015 Madrid
Tlf. (+34) 91 544 28 46
E-mail: info@dykinson.com
<http://www.dykinson.com>

Preimpresión: TALLERONCE

ISBN: 978-84-9148-895-8
Depósito Legal: M. 35573-2018

Versión electrónica disponible en e-Archivo
<http://hdl.handle.net/10016/27638>

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España

ÍNDICE

1. El concepto de discriminación indirecta: su delimitación y aplicación en el derecho social comunitario europeo y español. <i>Elisa Sierra</i>	11
2. Colectivos vulnerables y género. <i>María Gema Quintero Lima</i>	27
3. La flexibilidad en el tiempo y en el lugar de trabajo como elemento de mantenimiento de las trabajadoras con responsabilidades familiares en el mercado. <i>Patricia Nieto Rojas</i>	49
4. Seguridad Social y discriminación intersectorial: la edad y la discapacidad desde la perspectiva de género. <i>Eva M. Blázquez Agudo</i>	71
5. Trabajo autónomo decente de la mujer. <i>María Teresa Alameda Castillo</i>	93
6. Fomentando la formalización del emprendimiento femenino con un registro electrónico de empresas y una entidad de responsabilidad limitada simplificada. <i>Marta García Mandaloniz</i>	131
7. La Meta 8.7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 8: Una aproximación al incumplimiento por parte del Reino de España. <i>Tania García Sedano</i>	175
8. Los objetivos de desarrollo sostenible y el trabajo de cuidados: el caso de las madres comunitarias en Colombia. <i>Yenny Zuleima Carreño Contreras</i>	199

FOMENTANDO LA FORMALIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO CON UN REGISTRO ELECTRÓNICO DE EMPRESAS Y UNA ENTIDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SIMPLIFICADA¹

Marta GARCÍA MANDALONIZ
Universidad Carlos III de Madrid
Profesora titular Derecho mercantil

RESUMEN: Se plantea una reflexión para avanzar en la disminución y aceleración de los trámites de constitución y puesta en marcha de una empresa con el ánimo de promover el espíritu empresarial desde un criterio inclusivo. Dicha reflexión se sustenta en las labores del Grupo de Trabajo I de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) materializadas en dos Guías Legislativas. La primera tiende hacia un sistema de constitución de sociedades mercantiles electrónico y eficiente mientras que la segunda conduce hacia la simplificación y la flexibilidad de una entidad de responsabilidad limitada. Ambas tratan de eliminar los posibles obstáculos legales al emprendimiento con una legislación clara, sencilla y directa. Uno de sus fines es reducir la brecha de género empresarial y agrandar el empoderamiento económico femenino.

1 La presente investigación (cerrada a 13 de septiembre de 2018) tiene origen en los trabajos previos a la ponencia titulada: “Emprendimiento y trabajo autónomo de la mujer” (compartida con la profesora ALAMEDA CASTILLO), a impartir por la autora en la Universidad Carlos III de Madrid el 9 de octubre de 2018 en el II Seminario del Programa de la actividad de ámbito universitario relacionada con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres: “Garantizando un trabajo decente a las mujeres”; correspondiente al proyecto de investigación del Instituto de la Mujer dirigido por la profesora BLÁZQUEZ AGUDO y del que se es miembro. En particular, el epígrafe 1, introductorio de este estudio, comienza con el contenido del último Informe del Banco Mundial “*Women, Business and the Law*”, de 2018, en el que esta autora ha colaborado como “*local partner*”, como anteriormente había colaborado en el informe de 2016. Por su parte, el epígrafe 2, relativo a la inscripción registral de las empresas, plasma de manera actualizada y abreviada buena parte de las reflexiones que la autora ha publicado en el siguiente capítulo de libro: GARCÍA MANDALONIZ, M., “Hacia un sistema único de constitución de sociedades mercantiles electrónico y eficiente”, en MADRID PARRA, A. (dir.), *Derecho mercantil y tecnología*, Aranzadi, 2018; bien que allí el enfoque se puso en los “ciberemprendedores”. Por último, el subepígrafe 3.3, relativo al capital social mínimo legal, acoge algunas de las citas que hubo ocasión de emplear y desarrollar en: GARCÍA MANDALONIZ, M., “El cuestionado sentido del régimen jurídico del capital social”, en HIERRO ANIBARRO, S. (dir.), *Simplificar el Derecho de sociedades*, Marcial Pons, 2010.

PALABRAS CLAVES: Emprendimiento femenino, registro electrónico empresas, entidad limitada simplificada, CNUDMI.

SUMARIO: 1. FOMENTANDO LA FORMALIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO. 1.1. Desde la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 1.2. Con igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 2. CON UN REGISTRO ELECTRÓNICO DE EMPRESAS. 2.1. Con eficiencia. 2.2. Con acceso electrónico directo. 2.3. Con cualquier tecnología. 2.4. Con o sin intermediación notarial. 2.5. Con identificación electrónica. 3. CON UNA ENTIDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SIMPLIFICADA. 3.1. Con personalidad jurídica y responsabilidad limitada. 3.2. Con objeto social general. 3.3. Sin capital social mínimo legal. 4. PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO FEMENINO. 4.1. Con una “legislación clara”. 4.2. Con incentivos para la formalización.

PROMOTING WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP WITH AN ELECTRONIC BUSINESS REGISTRY AND A SIMPLIFIED LIMITED LIABILITY ORGANIZATION

ABSTRACT: A reflection must be considered to progress in the acceleration of the steps to start a business with the aim of promoting entrepreneurship under inclusive criteria. This reflection is based on the work that Working Group I of the United Nations Commission for International Trade Law (UNCITRAL) has been carrying out in the field of micro, small and medium-sized enterprises (MSME) with the aim of preparing two Draft Legislative Guides. First, the Draft Legislative Guide on key principles of a business registry focuses on the creation of an e-business registry based on efficiency. Second, the Draft Legislative Guide configures a limited liability organization. Both Guides try to eliminate possible legal obstacles to entrepreneurship with clear, simple and direct legislation. One of their goals is to reduce the business gender gap and enlarge women’s economic empowerment.

KEY WORDS: *Women’s entrepreneurship, electronic business registry, simplified limited liability organization, UNCITRAL.*

“You must do the things you think you cannot do”.

ROOSEVELT, E., *You learn by living: Eleven keys for a more fulfilling life*, Harper Perennial, ed. anniversary, April 2011.

1. FOMENTANDO LA FORMALIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO

Las leyes influyen en las decisiones de las mujeres de comenzar y administrar negocios. El entorno jurídico influye en las oportunidades y los resulta-

dos económicos de las emprendedoras. Esta es la conclusión confirmada en la quinta y última edición, de 2018, del informe que el Banco Mundial viene publicando bianualmente bajo el título: “Mujer, Empresa y Derecho”² donde se analizan las legislaciones de ciento ochenta y nueve países respecto de los siguientes siete indicadores: el acceso a las instituciones, el uso de la propiedad, la obtención de empleo, los incentivos al trabajo, la presencia en los tribunales, la obtención de crédito y la protección de la mujer contra la violencia. La comprobación de que las normas en estos ámbitos de actuación influyen en la participación de las mujeres en la actividad económico-empresarial se ejemplifica con el dato de que desisten más en abrir o mantener un negocio en aquellos Estados donde la legislación les pone mayores trabas para emprender³. A menor igualdad legal de género, menor es el número de emprendedoras⁴. Con esta constatación, el Banco Mundial entiende que una forma de influir de forma positiva en los resultados económicos de las mujeres es la reforma de las normas limitativas de su participación en los negocios⁵.

Aunque no existe desigualdad legal para el emprendimiento femenino en países como España, Reino Unido o Nueva Zelanda⁶, existe en otros e, incluso, en algunos (como Bután, Guinea-Bisáu, Pakistán y Surinam) las mujeres ni siquiera pueden registrar una empresa⁷. Aun pudiendo registrar una empresa en el resto de naciones, sigue habiendo diferencia numérica entre las tasas de emprendimiento femenino y masculino. En el último período analizado por el informe especial “*Global Entrepreneurship Monitor*” (GEM) sobre emprendimiento femenino, correspondiente al bienio 2014 a 2016⁸, se verifica que la brecha de género empresarial se ha reducido en un 5%⁹ porque la actividad

2 Vid. WORLD BANK GROUP, *Women, business and the law 2018*, The World Bank, 2018, p. 1.

3 *Ibidem*, p. 6.

4 Figura 1.4.

5 *Ibidem*, p. 6.

6 *Ibidem*.

7 Cuadro 1.2, p. 11.

8 Vid. GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, *Women's entrepreneurship 2016/2017 Report*, GEM, 2017. Un resumen de este informe haciendo hincapié en los datos del emprendimiento femenino en España se extracta en la siguiente nota: CEPYME, “Aumenta el número de mujeres emprendedoras, reduciendo la brecha con respecto a los hombres”, *CEPYMENews*, 18 enero 2018.

9 En nuestra geografía nacional el porcentaje de la disminución ha sido superior, llegando a un 6,5% porque mientras en 2014 el emprendimiento correspondía en un 58,5% a

empresaria de las mujeres ha aumentado de media en los setenta y cuatro países analizados en un 10%¹⁰. No obstante estas positivas cifras que hacen contemplar una esperanzadora tendencia, únicamente en cinco Estados de América Latina y del Sudeste Asiático¹¹ el porcentaje de emprendedoras es superior al de emprendedores, pero cuando las mujeres emprenden allí lo hacen por necesidad en un 20% más que los hombres¹². Es en las Economías desarrolladas donde las mujeres que emprenden lo hacen más por oportunidad que por necesidad¹³. Pero, a mayor nivel de desarrollo económico de un país, menor es el número de empresas creadas por las mujeres y, por ende, mayor es la brecha de género empresarial, siendo Turquía el país con mayor brecha del mundo¹⁴. Mientras en Senegal la tasa de actividad emprendedora (TEA, por sus siglas en inglés)¹⁵ femenina es del 37%, en Estados europeos como Alemania, Italia y Francia la tasa no alcanza el 4%, siendo la media europea de tan solo un 6,3%¹⁶. Muchas veces no emprenden, muchas veces ni siquiera tienen intención de emprender. La tasa de intención de emprendimiento femenino es de media en Europa (como en Asia Central) un 12,4% y se queda en un 5,7% en España¹⁷. En Economías avanzadas como las europeas no son los impedimentos legales los que cercenan el emprendimiento femenino como tampoco lo son los educativos. El mayor impedimento es la baja

los hombres y en un 41,5% a las mujeres, en 2016 era en un 55,7% de hombres y un 44,3% de mujeres.

10 Vid. GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, *Women`s entrepreneurship 2016/2017...*, op. cit., p. 8. Asimismo, vid. CEPYME, “Aumenta el número de mujeres emprendedoras...”, op. cit.

11 México, Brasil, Indonesia, Filipinas y Vietnam. *Ibidem*.

12 *Ibidem*.

13 Las tasas son en un 80% por oportunidad y en un 20% por necesidad, bien que en España el emprendimiento por necesidad alcanza una cota del 25,1% y el emprendimiento por oportunidad cae al 70,7%. *Ibidem*, p. 58.

14 Que Turquía es el país con mayor brecha de género empresarial del mundo porque por cada tres mujeres empresarias hay diez hombres, se comentaría en: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, *Special Report, Women`s entrepreneurship 2015*, GEM, 2015, p. 7.

15 TEA: “*Total Entrepreneurial Activity*”.

16 Y del 4,7% en España en 2016, con un crecimiento del 2% desde 2014. Vid. GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, *Women`s entrepreneurship 2016/2017...*, op. cit., p. 62. Asimismo, vid. CEPYME, “Aumenta el número de mujeres emprendedoras...”, op. cit.

17 El dato de que la intención de emprender fue en 2016 en España del 5,7% se mostró en: *Ibidem*, p. 62, donde se añadió que había sido en 2014 del 8%.

percepción de la capacidad propia¹⁸, en el doble sentido de no creerse capaz de crear una empresa y de temer al fracaso. Es miedo a arriesgar, es miedo a fallar¹⁹. Ahora bien, pese a que en la geografía europea las leyes no sean un obstáculo y porque en otras geografías sí lo son, las reformas legales de impulso del emprendimiento femenino son bienvenidas en unas y otras latitudes. Propuestas de reformas legislativas para fomentar el emprendimiento femenino formalizado proceden desde los organismos internacionales y las instituciones europeas, según habrá ocasión de plantear durante la presente investigación en los epígrafes que siguen a este introductorio.

1.1. Desde la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

En las tareas que, desde febrero de 2014, viene desplegando el Grupo de Trabajo I de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre las micro, las pequeñas y las medianas empresas (MIPYME) la inscripción registral empresarial se considera un elemento esencial para un entorno jurídico-empresarial propicio²⁰. Cuanta mayor rapidez y simplicidad se estampe a la hora de poner en marcha una empresa más se favorecerá la formalización²¹. A menor coste y tiempo de inscripción registral, menor será el sector empresarial informal y, por correlación, mayor el empresariado formalizado²². La formalización se traduce en visibilidad en los mercados ante el público y el Estado, en un mejor acceso al sistema bancario y a las instituciones financieras, en extensión de las oportunidades de negocio y en amplificación de la rentabilidad, la productividad y la competitividad²³.

18 En España, no obstante, las mujeres tienen una superior percepción de capacidades que la media europea, aunque, a cambio, tienen inferior percepción de oportunidades que la media europea, según: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, *Special Report...*, *op. cit.*, p. 144.

19 Se alude al miedo a fallar, por ejemplo, en: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, *Women`s entrepreneurship 2016/2017...*, *op. cit.*, p. 44. El miedo a arriesgar también se había contemplado en el Informe especial de GEM de 2015 antes citado.

20 Epígrafe II, páginas 5-9, de la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 5 de septiembre de 2014 sobre “las mejores prácticas de inscripción registral de empresas” (A/CN.9/WG.I/WP.85).

21 Página 5 del documento de la CNUDMI citado en la nota a pie de página previa.

22 *Ibidem*, p. 6.

23 Conforme detalla la Nota de la Secretaría de la CNUDMI titulada: “Reducción de

La formalización de los pequeños empresarios es el ítem de partida y de llegada del proyecto de Guía Legislativa de la CNUDMI sobre los principios fundamentales de la inscripción registral de empresas. Este proyecto fue aprobado en el 51º período de sesiones de la CNUDMI que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York del 25 de junio al 13 de julio de 2018²⁴. Aunque todavía esté sin publicar el texto definitivo de la Guía, ya se fijan algunos de los aspectos de la que será su estructura definitiva en la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 10 de abril de 2018²⁵, donde se incorporan los cambios y adiciones que tuvieron lugar a raíz de las discusiones y decisiones del 30º período de sesiones del Grupo de Trabajo I en Nueva York del 12 al 16 de marzo de 2018²⁶. Como revisión de la documentación que sirviera de base de las deliberaciones de ese 30º período de sesiones se publicaba, el 10 de mayo de 2018, el documento rubricado: “Creación de un entorno jurídico propicio para el funcionamiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (MIPYME)”²⁷. En su prefacio se insiste en la situación de desventaja que sufren las MIPYME, sobre todo, en las Economías en desarrollo y en la necesaria labor de la CNUDMI para facilitar su formalización y funcionamiento²⁸. Se desea contribuir, así, a la tercera meta del octavo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la “Agenda 2030” de Naciones Unidas²⁹, esto es, a la promoción de las políticas que apoyen las actividades productivas y el emprendimiento y que fomenten la formalización de las MIPYME con la finalidad de promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible.

Este documento para un entorno económico propicio sirve de marco introductorio general de la labor de la CNUDMI en favor de las MIPYME³⁰ que se concreta, en primer lugar, en la Guía Legislativa de los principios funda-

los obstáculos jurídicos que afectan a las microempresas y pequeñas y medianas empresas” de 17 de julio de 2017 (correspondiente al 29º Período de sesiones del Grupo de Trabajo I), pp. 12-13.

24 Documentos oficiales de la Asamblea General correspondientes al septuagésimo tercer período de sesiones: Suplemento nº 17 (A/73/17).

25 Por razones técnicas dicha Nota tuvo que ser re-publicada el 21 de julio de 2018, como se indica en su primera nota a pie de página.

26 A/CN.9/940, apartado 2º, p. 3.

27 A/CN.9/941.

28 Anexo. Introducción, p. 3.

29 Resolución de la Asamblea General 70/1 aprobada el 25 de septiembre de 2015 en el septuagésimo período de sesiones: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030”.

30 Introducción, párrafo 3.

mentales de la inscripción registral. Esta Guía Legislativa no viene sola, viene bien acompañada. La buena compañía se la proporciona la (también en proyecto, aunque en etapa menos avanzada) Guía Legislativa sobre la entidad de responsabilidad limitada (ERL) que viene preparando en paralelo, desde 2014, la CNUDMI. Habrá ocasión de desgranar las “llaves maestras” de una y otra Guía a lo largo de las próximas páginas. En las líneas iniciales que ahora se redactan, quisiera distinguirse la innovación que para la regulación ambas Guías propulsan. Es innovación por flexibilidad; es innovación por simplicidad. Es innovación en la regulación mediante simplicidad y flexibilidad para favorecer la formalización de los pequeños empresarios. Unos pequeños empresarios que –en las palabras de la introducción del proyecto de Guía Legislativa sobre la ERL-CNUDMI– pueden ser “desde vendedores callejeros independientes que trabajan en mercados muy concurridos, a propietarios de negocios familiares pequeños que deseen ampliar y formalizar sus operaciones, hasta pequeños empresarios que intentan crecer y participar en sectores más innovadores como el de la tecnología de la información”.

1.2. Con igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Es para todos los pequeños empresarios, emprendedores que acometen un negocio³¹ o empresarios³² con negocios consolidados que pretendan desarrollar sus actividades en el sector formal de la Economía. Es para todos ellos sin distinciones por razón de género como tampoco por motivos de raza, color, “idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”, en la literalidad del apartado b) sobre el “acceso a los servicios de inscripción del registro de empresas” de la Guía sobre los principios fundamentales del registro³³. El principio de no discriminación abarca a toda clase de condición, también de género, en la Recomendación nº 33 de la Guía. El acceso a los servicios de inscripción registral de empresas no puede negarse por ley a los posibles solicitantes de la inscripción y solo puede estar condicionado al cumpli-

31 “Emprendedor” es, en la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, quien emprende empresas innovadoras; entendiéndose por el verbo “emprender” la acción de acometer y comenzar un negocio.

32 El “empresario” es entendido por la Real Academia como el “titular propietario o directivo de una industria, negocio o empresa”.

33 Párrafo 167, p. 56.

miento de los requisitos de edad mínima y a los requisitos de procedimientos aplicables para la utilización de estos servicios de inscripción registral, tales como la identificación previa o el pago de las tasas, en su caso³⁴. En definitiva, es sin discriminación por razón de sexo como tampoco por “cualquier otra condición o circunstancia personal o social”³⁵, para preservar y garantizar el principio de igualdad suscrito en las leyes fundamentales nacionales, como se preserva y garantiza en el artículo 14 de la Constitución española.

Aunque la CNUDMI formula en esta Guía Legislativa el principio de no discriminación en términos excelsos, observa, acto seguido, la necesidad de incidir en la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Por ello, la Recomendación siguiente, la n° 34, especifica la “igualdad de derechos de la mujer para acceder a los servicios de inscripción del registro de empresa”³⁶. El empoderamiento de la mujer es uno de los objetivos principales de las Naciones Unidas; expresado, desde el 18 de diciembre de 1979, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer³⁷, y en su Protocolo facultativo, aprobado por la Resolución 54/4 de la Asamblea General, de 6 de octubre de 1999³⁸; así como en Resoluciones posteriores, como la 67/202³⁹, de 21 de diciembre de 2012, donde se recuerda el papel de las mujeres como impulsoras de la iniciativa empresarial, sobre todo en los países en desarrollo. El empoderamiento femenino también debe figurar entre las prioridades de los Estados para derrumbar las desigualdades que padecen las mujeres en materia económica con el ánimo de promover su destacado papel en el desarrollo sostenible y el crecimiento económico⁴⁰.

Empoderamiento económico de la mujer para seguir creando y desarrollando empresas en aquellos lugares del mundo en donde las crean y desarrollan, incluso, con mayor tasa de crecimiento empresarial que los hombres⁴¹.

34 Párrafos 167 y 168, correspondientes a la página 56 de la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 10 de abril de 2018.

35 En la literalidad del artículo 14 de nuestra Constitución.

36 Recomendación n° 34, en concordancia con los párrafos 172 a 174 (apartado C), pp. 57-58.

37 Con entrada en vigor como Tratado internacional el 3 de septiembre de 1981.

38 En vigor desde el 22 de diciembre de 2000.

39 Resolución 67/202, de 21 de diciembre de 2012, de iniciativa empresarial para el desarrollo (A/RES/67/202).

40 Párrafos 172 a 174 del Anexo de la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 10 de abril de 2018.

41 Como indica la Secretaría de la CNUDMI citada *supra* en la nota a pie de página previa.

Empoderamiento económico femenino para pasar del sector informal (o “no reglamentado”)⁴² –donde un gran número de las MIPYME de mujeres se ubican– al sector formal (o “reglamentado”) de la Economía⁴³. Empoderamiento económico femenino para eliminar los “graves obstáculos para poder realizar sus actividades comerciales” con que se topan en muchas regiones⁴⁴. Son obstáculos por diferencias en materia de educación superior y de conocimientos financieros, son obstáculos por el menor o el peor acceso a la financiación bancaria, son restricciones culturales y sociales, son incluso limitaciones legales y reglamentarias. Los marcos legislativos y reglamentarios nacionales imponen en ocasiones trabas respecto de la capacidad jurídica o del derecho a la propiedad⁴⁵ o, aun no imponiéndolas en esta capacidad y este derecho, exigen en otras ocasiones mayores o diferentes requisitos para la puesta en marcha de un negocio, en concreto, en la inscripción registral de la empresa⁴⁶. En cuatro Economías –se recalca– las mujeres no pueden registrar una empresa⁴⁷. En otras pueden registrarla, pero previo consentimiento del cónyuge o previa presentación de un mayor número de documentos para la inscripción⁴⁸. En otras muchas pueden registrarla sin consentimiento ajeno ni presentación de documentación adicional, por regir el principio constitucional de igualdad, pero regímenes consuetudinarios o “regímenes jurídicos paralelos”⁴⁹ vulneran en la práctica el derecho de la mujer a dar inicio a una actividad empresarial. Por todo lo anterior, esta primera Guía de la CNUDMI para las MIPYME incide en un “criterio inclusivo para promover el espíritu empresarial” con medidas para la eliminación de los obstáculos jurídicos y

42 Se indicaría en los párrafos 17 y siguientes del documento de la CNUDMI sobre la creación de un entorno jurídico propicio para el funcionamiento de las MIPYME que el concepto de “informalidad” no es uniforme. Aunque se trata de una actividad “no reglamentada” no tiene por qué ser ilícita y puede deberse a una necesidad económica, a elevadas exigencias y costes, a la falta de información o a la falta de oportunidades (párrafos 11, 20, 22 y 25, pp. 8-9).

43 *Ibidem*.

44 *Ibidem*.

45 Párrafo 172.

46 Párrafo 173.

47 Cuadro 1.2 del informe del WORLD BANK GROUP, *Women, Businesses..., op. cit.*, p. 11.

48 En el texto del párrafo 172 de la última Nota de la Secretaría de la CNUDMI.

49 Párrafo 173.

reglamentarios y con el fin último de conseguir la igualdad real de género⁵⁰. Aboga, en particular, en su Recomendación n° 34, por los iguales y legítimos derechos de la mujer en el acceso a los servicios de inscripción del registro de empresas para el comienzo de una actividad comercial, así como por la igualdad de los requisitos para la inscripción registral de las empresas sin discriminación alguna por razón de género. Aboga, en general, por un ordenamiento jurídico sin impedimentos para el emprendimiento, como no existen en el nuestro por refrendo del “principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia”, en la literalidad del artículo 5 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres⁵¹. Aboga, en suma, por los “derechos empresariales” para empoderar a las personas menos favorecidas para que establezcan sus propias empresas como fórmula de autoempleo y empleo para “ganarse la vida”⁵². En los denominados “derechos empresariales”, como conjunto de derechos para operar en el mercado, se incluye el derecho a crear una empresa en el sector formal de la Economía sin discriminación y con eliminación de las limitaciones legales⁵³. La operativa de las empresas en el sector de la Economía formalizada conlleva “importantes efectos de empoderamiento” que se aprecian especialmente en el caso de las mujeres⁵⁴.

No solo es para las mujeres el régimen jurídico previsto por la CNUDMI en la Guía Legislativa sobre los principios fundamentales para la inscripción registral empresarial, como tampoco lo es solo para ellas el régimen previsto en el proyecto de Guía Legislativa de la entidad de responsabilidad limitada, pero también es para todas ellas, sin discriminación y con igualdad real. Es en las mujeres dispuestas a iniciar una actividad empresarial en el sector formal de la Economía en quienes hace hincapié este organismo internacional y en quienes desde esta investigación quisiéramos fijar nuestra particular mirada cuando describamos y analicemos las citadas Guías Legislativas. Con esta visión tenemos el ánimo de resaltar el potencial de fomento de la formaliza-

50 Párrafo 174, p. 58.

51 BOE n° 71, 23 de marzo de 2007, pp. 12611-12645 (RCL 2007-6115).

52 De conformidad con el Documento de la CNUDMI sobre la creación de un entorno jurídico propicio para el funcionamiento de las MIPYME (párrafo 4, p. 4).

53 En la definición del párrafo 4 del documento citado *supra* en la nota a pie de página previa.

54 Según resaltara el documento de la CNUDMI sobre el entorno jurídico propicio para las MIPYME en los párrafos 28 y siguientes, pp. 10 y siguientes, y, en especial, p. 12.

ción del emprendimiento femenino que ofrecen ambas Guías. La velocidad y facilidad de la inscripción registral para la constitución de una sociedad mercantil mediante un sistema electrónico y eficiente, y la flexibilidad y simplificación en la configuración societaria son sus claves puestas al servicio no solo, pero también y sobre todo, de las emprendedoras.

2. CON UN REGISTRO ELECTRÓNICO DE EMPRESAS.

Hacia un sistema de registro *on-line* se encamina derechamente la Guía Legislativa sobre los principios fundamentales de la inscripción registral de empresas. Esta Guía propone un itinerario que transite desde un sistema registral en papel hacia uno mixto (en papel y en línea) y desde uno mixto hasta un sistema electrónico único. El objetivo final de este tránsito gradual⁵⁵ es la promoción de la inscripción registral de las MIPYME⁵⁶ para su operativa en el “sector formal de la Economía”, esto es, en el “contexto del régimen legal y reglamentario” determinado por un Estado para regir la actividad empresarial⁵⁷. Las razones esgrimidas para el establecimiento y el funcionamiento de un sistema registral electrónico entroncan con la integridad de los datos, la seguridad de la información, la transparencia del sistema, la verificación del cumplimiento de los requisitos legales por parte de las empresas y la evitación de almacenamiento en el Registro de información innecesaria o redundante⁵⁸.

La reducción del tiempo y el acceso en tiempo real, la transparencia de la información, la simplificación del proceso, la mejor disponibilidad del servicio, la facilidad de uso de una interfaz única, la precisión y seguridad de los datos y la disminución del costo fueron motivaciones destacadas en la postu-

55 El “enfoque gradual respecto de la implementación de un registro electrónico” para “lugares donde el acceso digital no está muy extendido” se plasmó en el apartado C, párrafos 72 y siguientes (pp. 27 y ss.) del Anexo del Proyecto de Guía en su versión final de 10 de abril de 2018.

56 En el apartado A, “Finalidad de la presente Guía” de la Introducción del Anexo del Proyecto de Guía, párrafo octavo, p. 6.

57 En la definición que proporciona esta Guía en la página 9.

58 Página 27 de la versión de 17 de julio de 2017 del proyecto de Guía Legislativa de la CNUDMI sobre los principios fundamentales de un registro de empresas. Igualmente en el proyecto revisado de Guía Legislativa fechado el 2 de enero de 2018 (A/CN.9/W.G.I/W.P.109), pp. 15 y siguientes; o en el párrafo 64, p. 25, de la Guía en su última versión de 10 de abril de 2018.

ra favorable a un registro *on-line* que adoptara una década atrás, en junio de 2007, el Banco Mundial en el documento de recomendaciones basadas en las “*Good practices for electronic business registries*”⁵⁹. Por un “procedimiento de registro que pueda ser cumplimentado electrónicamente a distancia en su totalidad, sin que se requiera la presencia física del fundador ante las autoridades del Estado miembro del registro” también se decantó⁶⁰ la Propuesta (abandonada) de Directiva europea de la sociedad unipersonal privada de responsabilidad limitada (SUP), de 9 de abril de 2014⁶¹, enmendada por el texto transaccional del Consejo de 28 de mayo de 2015⁶². Por la inscripción en línea también se decantaría luego el Grupo Informal de Expertos en Derecho de sociedades (GIEDS o ICLEG en acrónimo en lengua inglesa)⁶³ en un informe sobre la digitalización del Derecho de sociedades en la Unión Europea, fechado en marzo de 2016. Su marco general predecesor sería la Conferencia de 2015 sobre el Derecho de sociedades en la era digital y su marco sucesor el programa de trabajo de la Comisión europea para 2017⁶⁴ donde se anunciaba una iniciativa de Derecho de sociedades facilitadora del uso de las tecnologías digitales durante el ciclo de vida empresarial para una base industrial fortalecida en un Mercado Único Digital. Esa iniciativa anunciada ha desembocado para la Unión Europea en la Propuesta de Directiva, de 25 de abril de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del

59 La referencia es: LEWIN, A. (et al.), *Implementing electronic business registry (e-BR) services. Recommendations for policy makers based on the experience of EU accession countries*, The World Bank, June 2007, pp. 17-19.

60 En las palabras que respecto del capítulo 4 se emplearon en su Exposición de Motivos, en relación con el artículo 14.3

61 COM (2014) 212 final; 2014/0120 (COD). A su través se pretendía la derogación, a los veinticuatro meses desde su fecha de adopción, de la codificada Directiva 2009/102/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, en materia de Derecho de sociedades, relativa a las sociedades de responsabilidad limitada de socio único (DO L 258, 1 octubre 2009, pp. 20-25), en los términos que dispuso el apartado 1 del artículo 29 de esta Propuesta (luego paralizada).

62 Sesión del Consejo de la Unión Europea de 28 de mayo de 2015. Comunicado de prensa 377/15, 28 mayo 2015.

63 El *Informal Company Law Expert Group* (ICLEG) está registrado, desde el 26 de mayo de 2014, para trabajar en nuevas iniciativas sobre el Derecho de sociedades en Europa.

64 COM (2016) 710 final, 25 octubre 2016, Anexo de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (SWD (2016) 400 final).

Derecho de sociedades⁶⁵; dentro del “*Company Law Package*”⁶⁶. Para evitar cargas y costes innecesarios a las emprendedoras, la pérdida de oportunidades de negocio por la dilatación en la inscripción o, incluso, la decisión de no creación de una empresa por temor a la “burocracia” registral⁶⁷, esta Propuesta de Directiva apuesta por un registro íntegramente en línea. Porque “el tiempo es oro”, porque el tiempo es un coste adicional se considera muy importante la completa digitalización del registro de una sociedad mercantil de capital hasta la adquisición de la personalidad jurídica sin la presencia física de la solicitante ante la autoridad competente del Estado miembro⁶⁸. Para no considerarlo una pérdida de tiempo, el tiempo máximo que fija su artículo 13 septies es de cinco días laborales para completar el proceso del registro electrónico de sociedades.

El planteamiento que hace esta Propuesta de Directiva sobre un sistema único electrónico de constitución de sociedades mercantiles y, en específico, de sociedades de responsabilidad limitada (SRL o SL) estaría en consonancia con el principio fundamental de “versión digital por defecto” promovido por el Plan de Acción sobre la Administración Electrónica 2016-2020⁶⁹ –y anunciado en la Estrategia para el Mercado Único Digital– para prestar los servicios públicos en forma digital como opción preferida y “a través de un único punto de contacto o ventanilla única y a través de diferentes canales”⁷⁰ (“*one-stop shop*”). Para llevarlo a cabo hay que tener presente la interconexión de los Registros Mercantiles de todos los Estados miembros que la Directiva 2012/17 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012⁷¹, prevé me-

65 COM (2018) 239 final; 2018/0133 (COD). SWD (2018) 141 final; SWD (2018) 142 final.

66 https://ec.europa.eu/info/publications/company-law-package_en (última consulta: 13 septiembre 2018).

67 Página 4 de la Propuesta de Directiva.

68 Páginas 4 y 5 de la Propuesta de Directiva.

69 COM (2016) 179 final, 19 abril 2016; acompañado de la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de mayo de 2017, sobre la Administración Electrónica de la Unión Europea 2016-2020 (2016/2273 (INI).

70 En la página 4 del Plan de Acción.

71 Directiva 2012/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, por la que se modifican la Directiva 89/666/CEE del Consejo y las Directivas 2005/56/CE y 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades (DO L 156 de 16.6.2012, p. 1).

dian­te la creación de una plataforma central de interconexión (“*European Central Platform*”), a fin de facilitar la comunicación entre Registros con un punto de vía de acceso por medio del “*European e-Justice Portal*”. Con este *background* que ha derivado, desde el 8 de junio de 2017, en el “*Business Registers Interconnection System*” (BRIS)⁷² se posibilita un fácil acceso a la información sobre las sociedades registradas mediante la comunicación electrónica de los Registros Mercantiles, con aumento de la transparencia, fiabilidad y seguridad y, a la vez, con reducción de la carga que las empresas al inicio tienen que soportar⁷³. La cooperación entre los sistemas registrales de diferentes jurisdicciones nacionales enlaza con la búsqueda de la eficiencia para los sistemas internos de inscripción registral electrónicos.

2.1. Con eficiencia

La cooperación para la eficiencia también es objetivo planteado por la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre los principios fundamentales de un registro de empresas⁷⁴. El sistema de inscripción registral empresarial no solo ha de tender a ser electrónico sino eficiente. Esta Guía Legislativa respalda la transición desde un sistema mixto (*off-line* y *on-line*) de inscripción hacia uno exclusivamente digital y lo encamina hacia la eficiencia. La eficiencia se regiría por los siguientes principios fundamentales⁷⁵: el primero, un trámite de inscripción sencillo, rápido, económico, fácil de aplicar y accesible al público; el segundo, una información registrada de las entidades mercantiles fácil de consultar y extraer; y el tercero y último, una información registrada fiable, actualizada e inalterada. En suma, se aglutinan la simplificación, la rapidez, la economicidad y la facilidad con la actualización y la fiabilidad⁷⁶. Bajo estos

⁷² <https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/2017/09/19/Business+Register+Interconnection+System> (última consulta: 13 septiembre 2018).

⁷³ Acción n.º 9 del Plan de Acción sobre administración electrónica y Directiva 2012/17/UE (COM (2015) 192 final).

⁷⁴ Así, en su versión de 17 de julio de 2017, pp. 4-5.

⁷⁵ En la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 5 de agosto de 2015 (A/CN.9/WG.I/WP.93), pp. 7-8; y en otras posteriores como la Nota de 2 de enero de 2018 (A/CN.9/WG.I/WP.109), pp. 15 y siguientes.

⁷⁶ La versión de 17 de julio de 2017 del proyecto de Guía Legislativa en estudio marcó (en la p. 9) como objetivo “simplificar los trámites registrales y lograr que sean rápidos, económicos y fáciles de utilizar para los usuarios”, así como la fiabilidad que derive en un sistema “digno de confianza” (p. 14).

principios las ventajas son, de un lado, la reducción del tiempo y de los gastos y, de otro, la disminución de la posibilidad de fraude y del riesgo de que el Registro Mercantil incurra en responsabilidad debido a la disminución de la probabilidad de cometer errores en el ingreso de los datos correspondientes a la inscripción o a la búsqueda de la información⁷⁷. Se facilita el acceso de las usuarias al servicio registral de manera prolongada, más allá del horario de atención al público de las oficinas presenciales, y se suministra mejor respuesta a las solicitudes de información que los terceros realicen sobre las inscripciones de las empresas⁷⁸.

2.2. Con acceso electrónico directo

En los términos vistos de eficiencia previstos por el Grupo de Trabajo I de la CNUDMI⁷⁹, con un número mínimo de trámites, unos plazos breves y precisos y a un bajo costo, el enfoque estaría centrado en la usuaria⁸⁰ y ésta tendría muy poca interacción con las autoridades competentes del registro. Bajo el principio de “acceso electrónico directo”⁸¹, el diseño de un sistema registral electrónico y eficiente permitiría a quienes estuvieran interesadas en emprender el envío de solicitudes desde cualquier computadora privada, además de desde las computadoras de uso público instaladas en las oficinas de los registros territoriales “o en otros lugares”⁸². “El acceso electrónico debería estar disponible de manera continua, con breves interrupciones para llevar a cabo las labores de mantenimiento previstas”⁸³, o por suspensiones debidas

⁷⁷ A/CN.9/WG.I/WP.93, p. 20. Después, A/CN.9/940, párrafo 65.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ Página 19 de la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 17 de julio de 2017.

⁸⁰ “Enfoque centrado en el usuario” para la eficiencia “en función de los costos, rapidez y desempeño de los proveedores de servicios”, en el párrafo 9º de la Introducción del proyecto de Guía en su última versión, p. 7.

⁸¹ Recomendaciones 37º y 38º de la Nota de 10 de abril de 2018, p. 62.

⁸² Tanto en la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 5 de agosto de 2015, pp. 20 y siguientes, como en la de 17 de julio de 2017, p. 68, o en la de 10 de abril de 2018, p. 61 (párrafos 185 y siguientes).

⁸³ Léase la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 7 de agosto de 2015 (A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.1), p. 19. También la literalidad de la Nota de la Secretaría de la CNUDMI sobre los principios fundamentales de la inscripción registral de las empresas de 7 de agosto de 2015 o la versión de 10 de abril de 2018, párrafo 164, p. 55 y Recomendación nº 32.

a causas de fuerza mayor⁸⁴. De esas interrupciones o suspensiones debería darse aviso para lograr la máxima transparencia en el funcionamiento de este sistema electrónico de disponibilidad continuada⁸⁵. El aviso con antelación de los períodos previstos de inactividad, el período máximo de suspensión del acceso registral y las disposiciones sobre la corrección de errores serían las “normas de servicio” que los Registros nacionales debieran establecer para alcanzar un funcionamiento transparente y fiable del sistema de inscripción⁸⁶.

2.3. Con cualquier tecnología

Aparte de garantizar la disponibilidad continuada, cabría reflexionar – como reflexiona la CNUDMI⁸⁷– sobre la posibilidad de que dicha inscripción fuera apta para la emprendedora mediante cualquier tecnología. La CNUDMI no recomienda una tecnología en particular⁸⁸. Podría ser válida tanto cualquier tecnología actual como cualquier otra tecnología incipiente⁸⁹. El tan universalizado acceso a los servicios de telefonía móvil permitiría una cómoda y rápida inscripción registral. Más allá del uso de la tecnología móvil, cabría deliberar –como delibera la CNUDMI⁹⁰– sobre la viabilidad de sustituir los programas informáticos tradicionalmente utilizados por aplicaciones tecnológicas más complejas y novedosas como, por ejemplo, la computación en la nube. La informática en la nube reduciría los recursos necesarios para hacer funcionar un registro electrónico eficiente, toda vez que no habría de mantener una infraestructura tecnológica propia. No obstante, se advierte que la nube peca de inseguridad. Una sosegada deliberación habría de sopesar las ventajas, de minoración de los recursos económicos, y las desventajas, de los riesgos a cubrir por una incompleta seguridad de los datos en la nube almacenados⁹¹.

84 En el añadido de la Nota de 17 de julio de 2017, p. 67.

85 *Ibidem*, p. 19.

86 En la Recomendación séptima, en relación con el párrafo 45 de la página 18, de la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 10 de abril de 2018.

87 Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 5 de agosto de 2015 (A/CN.9/WG.I/WP.93), p. 21.

88 Según el párrafo octavo de la introducción (apartado A: “Finalidad de la presente Guía”) del Anexo del Proyecto de Guía en su última versión, de 10 de abril de 2018, p. 6.

89 Páginas 6 y 7 de la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 10 de abril de 2018.

90 En el párrafo 69, p. 27, de la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 10 de abril de 2018.

91 En la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 5 de agosto de 2015, p. 21, se citó

El constante adelanto tecnológico acaso pudiera deparar el uso de las cadenas de bloques o, en su más conocido término en idioma inglés, *blockchain*⁹². Bien que aparecida esta *distributed ledger technology* (DLT) para el *bitcoin*, la expansión de su aplicación a terrenos distintos a esta criptomoneda o a otras como *Ethereum* no ha parado de crecer a un ritmo acelerado. Sin un registro centralizado, la potencialidad de esta tecnología se antoja inmensa⁹³ por su capacidad de extenderse y modularse a ámbitos muy dispares del original de la banca descentralizada. En la presente era de la descentralización, un método electrónico de registro de transacciones y de datos caracterizado originariamente por esa ausencia de centralización, como es esta tecnología *blockchain*, resulta aplicable a contornos externos al campo financiero en el que surgió en 2009. *Blockchain* no es solo una cuestión técnica sino jurídica. En las anchuras del terreno legal pudiera adentrarse en el campo del registro empresarial. En los anteriores debates del Grupo de Trabajo I de la CNUDMI en torno al proyecto de Guía Legislativa sobre los principios fundamentales de la inscripción registral empresarial se preguntó por la viabilidad de las cadenas de bloque en este específico entorno. Como respuesta a esta cuestión se consideró necesario seguir investigando a partir de las conclusiones que pudieran extraerse de las ponencias y los documentos de trabajo sobre las nuevas tecnologías presentadas al Congreso conmemorativo del 50º aniversario de la CNUDMI, celebrado

como análisis de los riesgos que conlleva el uso de la computación en la nube el siguiente estudio: INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, *Task manager's ICT toolkit for designing and implementing online registry applications*, IFC, Mars 3, 2015, p. 28. Sobre los convenientes e inconvenientes de la nube a este respecto, léase, asimismo, la posterior Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 17 de julio de 2017, p. 29.

92 Recientes monografías redactadas o traducidas al castellano que ofrecen una visión amplia sobre los aspectos técnicos y prácticos de *blockchain* son: GONZÁLEZ-MENESES ROBLES, M., *Entender blockchain: una introducción a la tecnología de registro distribuido*, Aranzadi, junio 2017; PREUKSCHAT, A. (coord.), *Blockchain: la revolución industrial de Internet*, Ediciones Gestión 2000, 2017; PREUKSCHAT, A. (coord.), *Comunidad blockchain. El futuro de la criptoconomía descentralizada y las ICO's*, Íñigo Molero editor, 2018; TAPSCOTT, D., *La revolución blockchain. Descubre cómo esta nueva tecnología transformará la Economía global*, Deusto, febrero 2017. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, destacan estas dos obras de reciente publicación: IBÁÑEZ JIMÉNEZ, J. W., *Blockchain: primeras cuestiones en el ordenamiento español*, Dykinson, 2018, 192 pp.; IBÁÑEZ JIMÉNEZ, J. W., *Derecho de Blockchain y de la tecnología de registros distribuidos*, Aranzadi, 2018, 503 pp.

93 GARCÍA, E., "Blockchain. ¿De verdad es importante?", *Clifford Chance Advisor*, nº 7, 2017, p. 9, reconoce "su valor presente y su tremendo potencial futuro".

en Viena del 4 al 6 de julio de 2017. A partir de esas conclusiones, el Grupo de Trabajo solicitó a la Secretaría incluir en la versión de 2 de enero de 2018 del proyecto revisado de Guía Legislativa la referencia expresa a las “tecnologías incipientes, como la de los registros descentralizados, que los Estados puedan estimar conveniente adoptar cuando reformen sus sistemas de inscripción registral de empresas”, como así ha quedado reflejado también en la última versión de 10 de abril de 2018⁹⁴. Ya antes había sido indicado que el Estado de Kuwait estaba planteando la posibilidad de usar esta tecnología para estos fines. Lo que no se expuso entonces es que Dubái también había identificado la *blockchain* para el registro de empresas como uno de sus proyectos piloto⁹⁵ ni que Estonia hace tiempo que lo emplea a este respecto.

2.4. Con o sin intermediación notarial.

Con independencia de la tecnología (móvil, de computación en la nube, de cadena de bloques o cualquier otra) a emplear en la inscripción registral, recordemos que el Grupo de Trabajo I de la CNUDMI⁹⁶ invita a que los Estados prevean un sistema de inscripción con acceso electrónico directo de la usuaria para facilitar la máxima rapidez en la formalización del emprendimiento, desde nuestro punto de vista femenino. El acceso electrónico directo aumenta la eficiencia del proceso, en tanto incrementa las posibilidades de acceso y reduce los costos de funcionamiento y mantenimiento⁹⁷. En este acceso directo la CNUDMI abre la posibilidad de que intermediarios, como los notarios, realicen las inscripciones en nombre de sus clientes cuando la legislación de un país exija su intermediación⁹⁸. También la Propuesta de Directiva europea de 25 de abril de 2018 respeta las tradiciones jurídicas nacionales de la participación del notario como intermediario en el procedimiento de registro⁹⁹. Su intermediación no se exige en un buen número de países¹⁰⁰, pero conocido es

94 Páginas 6 y 7.

95 En la referencia que a este proyecto piloto se hace en: FERNÁNDEZ HERGUETA, R., “El sector público y el uso de la *blockchain*”, PREUKSCHAT, A. (coord.), *Blockchain: la revolución industrial de Internet*, Ediciones Gestión 2000, 2017, pp. 97-98.

96 Antes en: A/CN.9/WG.I/WP.93, p. 21.

97 En palabras redactadas en la página 69 de la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 17 de julio de 2017.

98 *Ibidem*. También en la p. 61 de la Nota de 10 de abril de 2018.

99 Páginas 9 y 10 de la Propuesta de Directiva comunitaria.

100 Nota de la Secretaría de la CNUDMI sobre las mejores prácticas de inscripción registral de empresas de 5 de septiembre de 2014, p. 14.

que no se prescinde de su intermediación en España como tampoco en otros países regidos por el sistema de *Civil Law*¹⁰¹.

La utilización opcional o, en su caso, la no utilización de los servicios notariales había sido aludida en la documentación preparatoria de la Guía Legislativa de la CNUDMI antes de su versión actual de 10 de abril de 2018, en particular, mediante la remisión a la recopilación de las mejores prácticas de inscripción registral de las empresas¹⁰² de los países mejor situados en el *ranking* anual de la revista “*Doing Business*”; donde se cataloga a los países por la facilidad en la apertura de un negocio en función del número de procedimientos, del tiempo (en días) y del coste (en porcentaje de la renta *per cápita*). Pudiera objetarse y tildarse de “obsesión”¹⁰³ pretender la minoración de los plazos y los costes en la creación de una empresa con forma jurídico-societaria con base en esta clasificación estadística¹⁰⁴, pero de lo que no cabe duda es que “ningún Gobierno puede ya desatenderse de la reputación que confiere al *Doing Business* el patrocinio del Banco Mundial”¹⁰⁵.

101 Sabido es que los países que siguen el sistema de *Civil Law* son los que mantienen el notariado de corte latino-germánico. Vid. AA.VV., “¿Existe una función notarial europea?”, *El Notario del Siglo XXI*, n° 75, septiembre-octubre 2017, pp. 3-4; LUCINI MATEO, A., “El traslado internacional del domicilio social dentro de la Unión Europea, a debate en el IV Congreso Notariado Europeo”, *El Notario del Siglo XXI*, n° 75, septiembre-octubre 2017, p. 64.

102 Léase, para este particular, el apartado D (pp. 14-15) del epígrafe IV de la Nota de la Secretaría de la CNUDMI sobre las mejores prácticas de inscripción registral de empresas de 5 de septiembre de 2014.

103 Puede existir “obsesión” (como obsesión tenemos) por agilizar al máximo la cumplimentación de los trámites de constitución de una sociedad sin olvidar (como no olvidamos) que las sociedades mercantiles pueden actuar en el tráfico mercantil cuando está pendiente su inscripción en el Registro Mercantil como sociedad en formación, bajo el régimen jurídico de la Ley de sociedades de capital contenido en sus artículos 36 a 38; aunque JORDÁ GARCÍA, R., “Empresas de economía social y constitución telemática de sociedades”, en PARDO LÓPEZ, M^a M.; GÓMEZ MANRESA, M. F. (dir./coord.), *Economía social y Derecho. Problemas jurídicos actuales de las empresas*, Comares, 1 marzo 2014, p. 121 y nota a pie número 4, indicara que “existe obsesión por agilizar la cumplimentación [de los trámites notariales y registrales] olvidando, respecto a la agilización de la inscripción en el Registro Mercantil [...], que las sociedades mercantiles pueden funcionar, aunque esté pendiente el trámite de la inscripción en el Registro Mercantil”.

104 *Ibidem*.

105 En la matización final que incluyera YANES, P., “La sociedad limitada en la economía sostenible. Notas sobre una propuesta equivocada de un reformador impaciente”, *CDyC*, n° 54, 2010, p. 32.

Amén de simple y breve, es conveniente que el procedimiento electrónico sea de nulo o bajo coste para la emprendedora. Conviene que sea sin el cobro de tasas o, si se cobran, con tasas “suficientemente bajas” como para alentar o, al menos, no desincentivar la inscripción registral empresarial, en la matización general que introduce la Guía Legislativa de la CNUDMI¹⁰⁶. La generalización se convierte en especificación en el apartado segundo del artículo 13 quáter de la Propuesta de Directiva europea de 25 de abril de 2018, en concordancia con su Considerando octavo: solo con el cobro del coste de la administración real de la presentación del correspondiente servicio administrativo.

Que el pago de los derechos notariales es uno de los principales elementos de la diferencia de los gastos de inscripción registral empresarial entre los Estados miembros de la Unión Europea fue comprobado en el *benchmarking the administration of business start-ups*, publicado en enero de 2002 por la Dirección General de Empresa de la Comisión Europea¹⁰⁷. Esta comprobación contribuye a la tendencia hacia la opcionalidad o, incluso, hacia la eliminación de la función notarial. Contribuye, cuando menos, a un debate que ponga sobre la mesa los convenientes e inconvenientes de la elección entre un sistema de verificación *ex ante* y otro *ex post*. El “sistema de aprobación” o sistema de verificación anterior a la inscripción otorga seguridad jurídica garantizando la fiabilidad y la autenticidad de la titularidad y de la información que sobre la sociedad a registrar van a tener a disposición los terceros que interactúen en el mercado, favoreciéndose la prevención de los delitos y las controversias en interés de esos terceros y del propio Estado. La actuación del notario no se limita a confirmar la identidad sino también a garantizar la legalidad del acto¹⁰⁸. Pero, también el sistema sin autorización previa o “sistema declarativo” si pretende ser eficiente ha de saber garantizar la presentación al registro de información exacta sobre la identidad del solicitante y la transacción a rea-

106 Los párrafos 197 y siguientes, pp. 65 y siguientes, correspondientes al apartado VII de la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 10 de abril de 2018 están dedicados a las tasas en el sentido indicado en el texto principal.

107 Vid. JORDÁ GARCÍA, R., “Empresas de economía social...”, *op. cit.*, p. 14. Además, vid. EUROPEAN COMMISSION ENTERPRISE DIRECTORATE GENERAL, *Benchmarking the administration of business start-ups*, Centre for Strategy & Evaluation Services, January 2002, p. 10 (accesible en: http://iwp-koeln.org/wp-content/uploads/EC_2002_BABSU.pdf (última consulta: 13 septiembre 2018)).

108 Vid. AA.VV., “¿Existe una función notarial...?”, *op. cit.*, pp. 4-5.

lizar¹⁰⁹. En un sistema declarativo, que conlleva simplificación y aceleración, las disposiciones legales han de ser capaces de garantizar la autenticidad de la información facilitada por la emprendedora y su titularidad real. La transparencia del “beneficiario final de una empresa” contribuye “a prevenir el uso indebido de los mecanismos societarios [...] con fines ilícitos”, en las palabras de la CNUDMI¹¹⁰; quien acentúa el carácter indispensable de una información de calidad, fiable y actualizada durante todo el ciclo de vida empresarial para fomentar la confianza de las usuarias en los servicios registrales¹¹¹.

2.5. Con identificación electrónica

Sin una hipotética intervención física notarial podría plantearse su intervención mediante medios a distancia como la videoconferencia u otra técnica a distancia que permita la conexión en tiempo real, como planea el Considerando 13º de la Propuesta de Directiva de 25 de abril de 2018. Sea cual sea la técnica adoptada y el sistema aceptado, resultaría indispensable implantar algún método de autenticación electrónica para la confirmación de la identidad de la emprendedora solicitante. De ser el procedimiento registral totalmente electrónico, la solicitante de la inscripción sería responsable de la veracidad de los datos inscriptos, para quien podría preverse la aplicación de sanciones en caso de infracciones, en advertencia de la CNUDMI¹¹². En orden a evitar riesgos, en especial, de fraude, abuso, blanqueo de capitales o suplantación de la identidad habría que diseñar mecanismos preventivos que condujeran a la identificación de la titularidad real.

Los esquemas digitales de identidad pueden clasificarse en tres categorías en función de su seguridad¹¹³: con un bajo nivel de seguridad estarían las

109 Al respecto, léase la nota a pie de página nº 26 (p. 7) de la Nota de la Secretaría de la CNUDMI sobre las mejores prácticas de inscripción registral de empresas de 5 de septiembre de 2014.

110 Nota de la Secretaría de la CNUDMI sobre las mejores prácticas de inscripción registral de empresas de 7 de agosto de 2015, pp. 6-7.

111 *Ibidem*, p. 9.

112 Como así advirtiera la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 17 de julio de 2017, pp. 91 y siguientes; y la previa de 7 de agosto de 2015, p. 20; o la posterior de 10 de abril de 2018 en sus Recomendaciones 45 y 46.

113 En atención a la clasificación que se realiza en: PAREJA, A. (et al.), *La gestión de la identidad y su impacto en la economía digital*, Banco Interamericano de Desarrollo, documento para discusión nº IDB-DP-529, agosto 2017, p. 15.

passwords; con un nivel intermedio de seguridad, los documentos electrónicos de identidad; y con un superior nivel de seguridad, *blockchain*. Ejemplos de unos u otros, empleados a los efectos registrales que nos ocupan, son el uso de la firma electrónica avanzada (como en Canadá o Chile)¹¹⁴, de un certificado digital con la asignación de una clave empresarial a modo de identificador único (como existe en Canadá o Australia)¹¹⁵, de la “*digital Id card*” incluida en el *kit* de “e-residente” de Estonia, o simplemente de un nombre de usuario y una contraseña apropiados como el RealMe *login y password* en Nueva Zelanda que facilita allí una veloz puesta en marcha de un negocio¹¹⁶. Las carencias ínsitas en una *password* podrían ser superadas mediante la firma electrónica en su modalidad más segura como firma cualificada o, incluso, mediante sistemas de control de la identidad de carácter biométricos, bien que tales sistemas de identificación biométrica probablemente hasta la fecha no sean ni fáciles ni baratos de implantar ni de generalizar¹¹⁷. A estas comprobaciones biométricas, por ejemplo, mediante huellas digitales, así como a las firmas electrónicas y los certificados electrónicos, además de a los nombres de usuario y contraseñas, o a los sistemas de notificación a las empresas inscritas de las modificaciones introducidas en su ficha registral se refiere la última versión del proyecto de Guía Legislativa para la protección de la identidad y la integridad de las empresas previniendo la usurpación de la identidad¹¹⁸.

Por su parte, la Propuesta de Directiva comunitaria sobre la utilización de las herramientas y los procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades propone contra el abuso, el fraude y las “sociedades fantasma” el control obligatorio de la identidad y la posibilidad de exigir la participación (digital)

114 En este sentido, en *ibidem*, p. 27, se ponen como ejemplos ilustrativos a Canadá o Chile. En la página 23 Canadá es nombrado como uno de los Estados con mejor desempeño en la inscripción empresarial en línea.

115 *Ibidem*, p. 24.

116 <https://companies-register.companiesoffice.govt.nz/help-centre/managing-your-online-account/setting-up-your-online-services-account/> (última consulta: 13 septiembre 2018).

117 Vid. LUCINI MATEO, A., “El documento público notarial en la perspectiva de la digitalización del Derecho societario europeo”, *El Notario del Siglo XXI*, n° 77, enero-febrero 2018, p. 146; donde se reproduce la conferencia que el autor dictara en el Colegio Notarial de Madrid el 11 de enero de 2018.

118 Páginas 15 y 16, párrafo 34.

de una persona (notario o abogado) en el proceso¹¹⁹. Conforme al artículo 13 ter, un Estado miembro deberá reconocer tanto los medios de identificación electrónica que hayan sido expedidos por un sistema de identificación electrónica del propio Estado como los medios de identificación electrónica expedidos por otro Estado que sean homologados y reconocidos según el artículo 6 del Reglamento (UE) 910/2014¹²⁰, y podrá reconocer cualesquiera otros medios de identificación electrónica, como una copia escaneada del pasaporte, en el ejemplo añadido en el Considerando séptimo de esta Propuesta.

Garantizando un elevado nivel de seguridad y confianza¹²¹, la normativa interna tendrá que adaptarse a las nuevas tecnologías hasta configurar un proceso electrónico eficiente de constitución de las sociedades mercantiles. En ese proceso cumplirían un papel principal, de un lado, los formularios tipo autorrellenables¹²² y, de otro lado, la ventanilla única empresarial (o VUE) virtual. Por una parte, habría que resaltar que el formulario tipo, a modo de “formulario único integrado”¹²³, tendría que ser accesible por medios electrónicos habilitando –como en España está habilitado¹²⁴– un modelo uniforme

119 En indicación de la página 4 de la Propuesta de Directiva, en concordancia con la página 14, donde se redacta el artículo 13 ter.

120 Reglamento (UE) 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el Mercado Interior (DO L 257, 28 agosto 2014, pp. 73-114). Ese artículo 6 remite al artículo 9, en coordinación con el artículo 8 sobre los niveles de seguridad de los sistemas de identificación electrónica, dividiéndolos en estos tres niveles: bajo (con grado limitado de confianza), sustancial (generador de sustancial confianza) y alto.

121 Preservando el nivel de control actual, precisaría ÁLVAREZ ROYO-VILLANUEVA, S., “Presentación crítica de la Propuesta de la Comisión Europea sobre digitalización y operaciones transfronterizas (traducción del post en *European Law Blog*)”, *Blog Hay Derecho*, 27 junio 2018.

122 Obsérvese, *verbigratia*, la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 10 de agosto de 2015, pp. 9-10; o la de 10 de abril de 2018, pp. 12-13, 19, 30.

123 Páginas 12 y 13 de la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 10 de abril de 2018.

124 Por Orden JUS/1840/2015, de 9 de septiembre, se aprueba el modelo de escritura pública en formato estandarizado y campos codificados de la sociedad de responsabilidad limitada, así como la relación de actividades que pueden formar parte del objeto social (BOE n° 219, 12 septiembre 2015, pp. 80471-80572 [RCL 2015-9803]); en concordancia con el Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial

de estatutos sociales (y de escritura de constitución)¹²⁵ y debería ser autorrrellenable con posibilidad de personalización de manera electrónica, ágil y sencilla para su plena adaptación a las necesidades y peculiaridades de cada actividad empresarial. Por otra parte, alusión general a las VUE, como interlocutor único para la simplificación de la vida empresarial, hubo en la *Small Business Act* (SBA) que dictara la Comisión europea en 2008¹²⁶ (y revisara en febrero de 2011)¹²⁷, donde se describieron como lugares donde “obtener toda la información pertinente y cumplimentar por vía electrónica todas las formalidades y los procedimientos necesarios”¹²⁸. Nueva alusión a la VUE, como “interfaz única integrada” a modo de plataforma electrónica común para la inscripción de la empresas en el Registro y la comunicación con otras autoridades públicas competentes, hay en la documentación que plasma los trabajos que el Grupo de Trabajo I de la CNUDMI ha llevado a cabo y culmi-

y la Bolsa de denominaciones sociales con reserva (BOE número 141, 13 junio 2015, pp. 49779-49786 [RCL 2015-6520]).

125 A los “modelos en línea de escrituras de constitución” se refiere el artículo 13 octies de la Propuesta de Directiva de 25 de abril de 2018, de forma añadida a los modelos de estatutos disponibles en línea (Considerando 11º) como opción para la utilización o personalización.

126 *Communication for the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Think Small First”: a “Small Business Act” for Europe* (SEC (2008) 2101) (SEC (2008) 2102) (COM (2008) 394 final, June 25, 2008, 24 pp.). La alusión a las VUE se plasmó en la página 11 de la redacción originaria de la SBA.

127 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Revisión de la “*Small Business Act*” para Europa (COM (2011) 78 final, 23 febrero 2011, 28 pp.). En orden a evaluar los progresos alcanzados, detectar los obstáculos persistentes y los desafíos pendientes y examinar las nuevas necesidades (pp. 2-3), la revisión de 2011 de la SBA alentaba (en la página 9) a los países miembros a establecer un interlocutor único mediante las VUE.

128 En el desarrollo de las VUE, como “portales de administración electrónica de fácil utilización para el usuario”, se incidiría en la revisión de 2011 de la SBA (p. 8). La creación de las VUE, configurando la denominada “Red EUGO”, era una de las obligaciones establecidas en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376, 27 diciembre 2006, pp. 36-68), más conocida como: “Directiva de Servicios”. Con posterioridad su impulso se vino manteniendo por el Plan de Acción Europeo *e-Government* 2011-2015 (SEC (2010) 1539 final; COM (2010) 743 final, 15 diciembre 2010, 16 pp.), por la Agenda Digital en Europa y por las Agendas Digitales de los Estados miembros. Más detalles se hallan en el Portal EUGO: <http://www.eugo.es> (última consulta: 13 septiembre 2018).

nado para formular esta Guía Legislativa sobre los principios fundamentales del registro de empresas¹²⁹.

Con tecnologías que presten servicios con confianza, veracidad y validez conforme a la legislación interna y europea¹³⁰; con el uso de un “identificador único” de cada empresa¹³¹; con unos formularios tipo de estatutos sociales autorrellenables, personalizables y enviables por vía electrónica para su elevación a escritura pública digital; y con una VUE virtual accesible y apta desde cualquier dispositivo móvil se caminaría en dirección hacia un sistema único electrónico de constitución de sociedades mercantiles eficiente. La eficiencia requerida se dotaría de accesibilidad, economicidad y fiabilidad para la formalización del emprendimiento femenino.

3. CON UNA ENTIDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SIMPLIFICADA

La rapidez a bajo coste de un modelo de inscripción registral exclusivamente electrónico, sin presencias físicas y sin papeles, ha de saber combinarse con una forma jurídica empresarial flexible y sencilla¹³², con el propósito de

129 Así, en la Recomendación nº 14 y las páginas 7, 12-13, 32 y siguientes, y 82 y 86 y siguientes de la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 10 de abril de 2018, donde se diferencian dos modalidades: “ventana única” o “mostrador único”, con un alto nivel de integración de los organismos competentes, y “puerta única”, con un espacio compartido en el que la solicitante trata a cada organismo por separado. Entre las ventanillas únicas en oficinas físicas y las ventanillas en plataformas electrónicas comunes se apuesta por las plataformas digitales por el mejor aprovechamiento de las ventajas de las TIC. Anteriormente, también puede leerse, a este respecto, la Nota de 10 de agosto de 2015, pp. 3-6; o la de 17 de julio de 2017, pp. 5, 8, 34 y siguientes.

130 Como sucede en el ecosistema de *blockchain* ALASTRIA, que se presenta en su página *web* como el “primer consorcio multisectorial promovido por empresas e instituciones [también notariales] para el establecimiento de una infraestructura semipública permitida *blockchain* que soporte servicios con eficacia legal en el ámbito español y acorde con la regulación europea”, y donde se manifiesta que “la “Red ALASTRIA” va acompañada del estándar de identidad digital “ID ALASTRIA” para que las transacciones sobre la Red ALASTRIA puedan tener validez legal”. <https://alastria.io> (última consulta: 13 septiembre 2018).

131 Párrafos 94 y 98 y siguientes (pp. 35 y ss.) y Recomendaciones 15 y 16 de la Guía en su versión de 10 de abril de 2018.

132 La Recomendación nº 57 (ap. C, párrafos 240 a 243) de la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 10 de abril de 2018 enfoca las formas jurídicas empresariales flexibles como complemento del registro electrónico empresarial.

incrementar las cotas de formalización del emprendimiento, desde nuestro enfoque, femenino. Desde esta finalidad principal se percibe la necesidad y conveniencia de configurar un marco jurídico-societario ágil y maleable. Ello podría trastocar, hasta reestructurar, la tipología societaria decimonónica de las denominadas “sociedades de capitales”; cuyo *nomen*, incluso, podría variar si se desmontara –como la Guía Legislativa de la entidad de responsabilidad limitada o ERL-CNUDMI alienta a desmontar– el principio del capital social mínimo legal. La facilitación de la inscripción registral “se agarra de la mano” con la simplificación de las formas jurídicas y esta simplificación implica la derogación del requisito de capital mínimo o, cuando menos, de la reducción de su cuantía a una “suma simbólica”¹³³.

El hecho de que en nuestra geografía abunden las empresas que no acogen ningún molde societario para desenvolver actividades económicas¹³⁴, actuando bajo las mínimas reglas del empresario (en nuestro caso, empresaria) individual sin el gozo del beneficio de la responsabilidad limitada –en tanto la figura del emprendedor de responsabilidad limitada (también en siglas “ERL”) goza de escaso éxito en la práctica¹³⁵–, junto con el hecho de que en ocasiones se constituyan sociedades mercantiles fuera del territorio nacional buscando en el extranjero normas más livianas, nos detiene a pensar. El pensamiento no nos conduce a sostener que todos los “males” sean a causa del vigente modelo europeo-continental de capital legal social sino derechamente hasta una regulación en la que falta más flexibilidad. La complejidad todavía inherente en nuestro Derecho societario es un coste en sí mismo a considerar. Se echa de menos un régimen jurídico que, sin descuidar un ápice los intereses ni de los socios ni de los terceros acreedores, esté dotado de reglas dispositivas que maximicen la autonomía de la voluntad, ahorrando costes administrativos y cargas burocráticas no solo en el momento fundacional sino a lo largo de la

133 Párrafos 240, 241 y 242 de la Nota citada *supra* en la nota a pie de página previa.

134 Conforme al Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero de 2017, de las 3.279.120 empresas españolas, 1.746.657 eran personas físicas actuando como empresarios individuales, representando el 53,3% del total. Vid. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD, *Retrato de la PYME, a 1 de enero de 2017*, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2018, p. 3.

135 Atendiendo a: REGISTRADORES DE ESPAÑA, *Estadística Mercantil. Ejercicio 2016*, 2017, p. 3, durante 2016 se inscribieron un total de doce ERL en el territorio nacional. Un año después se inscribirían otras quince ERL, según: REGISTRADORES DE ESPAÑA, *Estadística Mercantil. Ejercicio 2017*, 2018, pp. 2-3.

vida de la sociedad¹³⁶, favoreciendo la formalidad, la competitividad y la productividad empresarial.

3.1. Con personalidad jurídica y responsabilidad limitada.

Tras el proceso de inscripción *on-line* en el Registro Mercantil provincial de que se trate, en función del lugar donde se sitúe el domicilio social, una sociedad suficientemente flexible y simplificada como la planteada por la CNUDMI adquiriría su plena personalidad jurídica para actuar en el tráfico mercantil. La sociedad mercantil simplificada tendría personalidad jurídica y actuaría con responsabilidad limitada. Sabido es que la necesidad ampliamente sentida en el tráfico mercantil que aspira cubrirse con la configuración de una persona jurídica es la actuación con responsabilidad limitada por parte de quienes dan inicio a una actividad empresarial y quieren resguardar su patrimonio personal. Si se pretende (como el proyecto de Guía Legislativa de la ERL-CNUDMI pretende) que un nuevo régimen jurídico resulte presto, útil y seguro para el emprendedor (en este caso, emprendedora), rasgo inherente del planteamiento de una figura jurídica simplificada debe ser la responsabilidad limitada.

3.2. Con objeto social general

Una arquitectura societaria sin pérdida ni de la personalidad jurídica ni de la responsabilidad limitada y con ganancia de la simplicidad y la flexibilidad

¹³⁶ El Informe, de 23 de noviembre de 2000, del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento en relación con el reexamen del proyecto SLIM (*Simpler Legislation for the Internal Market*) (Final A5-0351/2000) reñó, en el Considerando B y en la Exposición de Motivos, cómo “las investigaciones llevadas a cabo por la OCDE demostraban que entre el 4% y el 6% del producto interior bruto de los Estados miembros de la Unión Europea es absorbido por los trámites burocráticos. Estos trámites perjudican a la competitividad de las empresas en el mercado mundial y constituyen una amenaza para el empleo”. Por ello, propuso “la lucha contra la legislación superflua y la limitación de los costes que conlleva la aplicación de la legislación”. Desde noviembre de 2006, la Comisión Europea se sumergió en la estrategia “*Better Regulation in the European Union*” con la pretensión de simplificar las medidas legislativas y los costes económicos, comprobando que había potencial para la reducción administrativa en el Derecho societario, en disposiciones como las relativas a la constitución de las sociedades mercantiles.

configuraría a la nueva forma jurídica propuesta. La flexibilidad a imprimir se desenvolvería a partir de la capacidad de elección de un objeto social amplio y general por parte de los socios, en caso de sociedad pluripersonal, o del único socio, si de sociedad unipersonal se tratase. La amplitud del objeto social tendría como límite infranqueable la licitud de la actividad o de las actividades a desarrollar. El objeto social podría abarcar cualesquiera actividades lícitas, con la excepción de aquellas para las que la legislación especial precisare el formato de sociedad anónima o aquellas que para su ejercicio requirieran un objeto social único y exclusivo¹³⁷. Dentro de la anchura que proporciona una “cláusula de objeto de carácter general”¹³⁸ la actividad comercial o industrial podría variar una y otra vez sin necesidad de modificación estatutaria por cambio del objeto social y sin ser su sustitución ni su modificación sustancial causa legal de separación del socio disconforme¹³⁹. Por estos motivos –que facilitan, en último extremo, la inscripción registral de las empresas¹⁴⁰–, definen de una “cláusula de finalidad general” el proyecto de Guía Legislativa sobre la ERL-CNUDMI.

Si se nos permite hacer un breve *excursus* para descender desde el ámbito internacional al nacional, advertiremos cómo para las sociedades personalistas no exige el artículo 125 de nuestro Código de Comercio mención del objeto social en la escritura social. Solo se menciona si está determinado, pero no se precisa que el objeto lo esté¹⁴¹. Dentro de la panoplia de las sociedades capitalistas, para el caso particular de la sociedad limitada nueva empresa (SLNE) –como subtipo de la SRL– el párrafo cuarto del apartado sexto de la Exposición de Motivos de la (derogada) Ley 7/2003 que la configuró proclamó la flexibilidad del objeto social. Goza de un objeto social necesario¹⁴²,

137 Conforme queda excluido para la sociedad limitada nueva empresa en el artículo 436.3 LSC.

138 Vid., por todos, el siguiente documento: A/CN.9/WG.I/WP.92/Add.2, pp. 24-25.

139 Que sí es causa legal de separación en el artículo 346.1.a) LSC, en la redacción proporcionada por el artículo 1.17 de la Ley 25/2011, de 1 de agosto (BOE nº 184, 2 agosto 2011, pp. 87462-87477 [RCL 2011-13240]).

140 En la referencia del párrafo 243, pp. 77-78, de la Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 10 de abril de 2018 sobre los principios fundamentales de un registro de empresas.

141 Artículos 136 y 137 del Código de Comercio y 209.4º del Reglamento del Registro Mercantil.

142 Aplicamos el adjetivo “necesario” al objeto social para destacar su obligada mención en los estatutos sociales de la SLNE. El objeto social es una “mención esencial, casi constitucional”, comentaría, en general, BROSETA PONT, M., “Determinación e indeter-

amplio, genérico y difuso por la posibilidad de escoger todas o algunas de las actividades que lista el apartado primero del artículo 436.1 de la Ley de sociedades de capital (LSC): agrícola, ganadera, forestal, pesquera, industrial, de construcción, comercial¹⁴³, turística, de transporte, de comunicaciones, de intermediación, de profesionales o de servicios en general. Existe, además, la facultad de incluir como objeto social potestativo cualquier actividad singular distinta a las citadas¹⁴⁴, siempre que no sea ni una actividad para la que la ley exija la forma de sociedad anónima (bancaria, aseguradora, farmacéutica, de gestión de fondos de pensiones o de *leasing*, verbigracia) ni una actividad cuyo ejercicio implique un objeto único y exclusivo¹⁴⁵.

La flexibilidad del objeto social tanto de la SLNE como de la sociedad simplificada planteada conduce hacia la indeterminación. Un objeto social amplio y genérico chirría en un clásico sistema mercantil¹⁴⁶ acostumbrado tradicionalmente a un objeto social determinado¹⁴⁷ y negado a admitir la inclusión de la “realización de cualesquiera otras actividades de lícito comercio” o de “expresiones genéricas”¹⁴⁸. La determinación del objeto social ha venido sirviendo como medio para la delimitación del ámbito de representación del

minación del objeto social en la Ley y en los Estatutos de las sociedades anónimas españolas”, *RDN*, 1970, p. 9.

143 MARÍN CALERO, C., “Ley de la sociedad limitada nueva empresa”, *RJN*, nº 47, julio-septiembre 2003, p. 239, resaltó cómo, por ejemplo, la actividad comercial, más que amplia, es una actividad de las que la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) califica como “omnicomprensiva”. Asimismo, vid. SAPENA DAVÓ, F., “La Ley de la Sociedad Limitada Nueva Empresa”, *RJCV*, nº 7, 2003, p. 37. Acerca del carácter genérico de la actividad comercial, industrial, de profesionales o de servicios en general, véase: OLAVARIA IGLESIA, J., “Artículo 132. Objeto social”, en BOQUERA MATARREDONA, J. (Dir.), *La Sociedad Limitada Nueva Empresa. Comentarios a los artículos 130 a 144 y a las Disposiciones adicionales 8ª a 13ª de la LSRL*. Navarra: Aranzadi, 2003, pp. 63-64.

144 Apartado segundo.

145 Apartado tercero.

146 Y civil, según el artículo 1273 del Código Civil.

147 Artículo 117 del Reglamento del Registro Mercantil. Como comentara el profesor ILLESCAS ORTIZ, R., “La sociedad anónima de objeto plural”, en *AAMN*, T. XXXIV. Madrid: Editoriales de Derecho Reunidas, 1995, pp. 120-121, una rígida aplicación de la regla de determinación del objeto social se encuentra hoy menos justificada que antes de 1989, cuando el (derogado) texto refundido de la Ley de sociedades anónimas (TRLSA) reformó el Reglamento del Registro Mercantil anterior al vigente.

148 Artículo 117.3º del Reglamento del Registro Mercantil.

órgano de administración¹⁴⁹, para la concreción de la prohibición de competencia efectiva de los administradores¹⁵⁰, para el ejercicio del derecho de separación¹⁵¹ o como causa de disolución¹⁵². La indeterminación sirve, por el contrario, a diversos intereses en juego¹⁵³ y, por lo que aquí más importa, beneficia a las sociedades de reciente creación, presionadas en no pocas ocasiones por el mercado a cambiar de actividad empresarial y, por ello, a alterar el objeto social, en ocasiones, varias veces durante sus primeros años de andadura¹⁵⁴. Si ello es así en un mercado estable, más aún lo es en un mercado caracterizado por un continuo y rápido cambio como es el tecnológico. La amplitud del objeto social conllevaría, sin duda, una gran ventaja para las sociedades que inician y maduran sus actividades empresariales en el entorno digital. No solo requieren rapidez en el momento del nacimiento mediante un procedimiento registral por completo electrónico sino que ha de ser también una constante en el desenvolvimiento de las distintas fases empresariales con el ánimo de alargar el ciclo de vida empresarial para lograr perdurar. Necesitan (sobre todo, las empresas digitales) anticiparse y ajustarse a las variantes singularidades del mercado mediante cambios de las actividades a desempeñar sin cambios del objeto social que requieran variación previa de los estatutos sociales y posible posterior movimiento, por separación por no conformidad, del número de socios.

149 Artículo 234.1 LSC.

150 Artículo 229.1.f) LSC, como antes el artículo 65.1 de la antigua Ley de sociedades de responsabilidad limitada de 1995 (LSRL).

151 Artículo 346.1.a) LSC.

152 Artículo 363.1, letras a) y b) LSC; como con anterioridad a la entrada en vigor de la LSC, los artículos 260.1.3º TRLSA y 104.1.c) y d) LSRL).

153 RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., “Determinación estatutaria del objeto social”, en ALONSO UREBA, A. (et al.) (coord.), *Derecho de sociedades anónimas. I. La fundación*, Civitas, 1991, pp. 150-151, realizó un listado con los intereses a los que servía la indeterminación del objeto social. Entre estos intereses destacó la posibilidad de que las pequeñas empresas destinasen su patrimonio “a la realización de actos, negocios y contratos indeterminados, esto es, en definitiva, a cualquier tipo de actividad”. Unas páginas después (pp. 154, 156, 159) el citado profesor inclinó (ligeramente) la balanza hacia la determinación, sobre todo, en las sociedades de grandes dimensiones; declarando, al tiempo, que tanto la mayor parte de la doctrina de esa época como la DGRN habían optado decididamente por la determinación.

154 Como así comentara en relación con las pequeñas nuevas empresas el apartado VI de la Exposición de Motivos de la Ley 7/2003, por la que recordemos se configuró primigeniamente la regulación de la SLNE antes de su traslación en 2010 a la LSC.

Está prevista en el subtipo de la SLNE la continua muda de actividad sin obligación de realizar sucesivas modificaciones estatutarias por cambio de objeto social¹⁵⁵. Pero, consideramos que si el fin último era –como así defendía la Exposición de Motivos de su primigenia Ley– “permitir una mayor flexibilidad para el desarrollo de actividades económicas diferentes”, no hubiera hecho falta un catálogo de actividades como el que para ellas marca el transcrito artículo 436.1 LSC. Sin catálogos, el artículo 117.1 del Reglamento del Registro Mercantil (RRM) da facilidades para incorporar a los estatutos un objeto social plural o complejo, esto es, con actividades diversas, aun sin relación entre sí¹⁵⁶. Con la base jurídica de este último precepto, no hay obstáculos para admitir sociedades con un objeto social plural o complejo, siempre que ello no derive indirectamente en la indeterminación del objeto. Pluralidad, complejidad, amplitud y, en suma, indeterminación del objeto social por flexibilidad es, sin embargo, lo que se busca para una nueva sociedad mercantil prevista para actuar en el escenario de la moderna era tecnológica. Sin catalogación, la licitud de la actividad es la única línea a no traspasar. Con licitud, el paso de una a otra actividad no implicaría modificación de los estatutos. No se requiere la modificación estatutaria, por cambio de objeto, tampoco para la SLNE, pero para ella ni siquiera se permite modificación alguna de los estatutos, a excepción de la denominación, el domicilio o el capital social, dentro, éste último, de los límites mínimo y máximo legales permitidos¹⁵⁷. Modificaciones estatutarias no tanto para el objeto social (que sería general), pero sí para los demás extremos estarían permitidas, en cambio, para la sociedad simplificada que desde este estudio vamos esbozando. Esos extremos no alcanzarían, al modo en el que hoy alcanzan, al capital social, empero. Sin capital social mínimo (ni máximo) legal se desenvolvería (no solo transitoriamente en sus orígenes como lo hace la sociedad limitada de formación sucesiva o SLFS) la ERL ideada por la CNUDMI.

3.3. Sin capital social mínimo legal

La tendencia actual de la que se ha hecho eco la CNUDMI en esta segunda propuesta de Guía Legislativa en estudio (como antes las instituciones eu-

¹⁵⁵ En la nota de prensa de “El Gobierno informa” de 13 de enero de 2003, el Ministerio de Economía cifró en torno a los cuatrocientos ochenta euros el ahorro que suponía no estar obligado a efectuar una modificación estatutaria por cambio de objeto social.

¹⁵⁶ Como puntualizaría RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., “Determinación...”, *op. cit.*, p. 164.

¹⁵⁷ De conformidad con el restrictivo artículo 450.1 LSC.

ropeas en la propuesta olvidada de Directiva de SUP) hace presagiar que la respuesta futura irá encaminada a menguar el papel del capital social como salvaguardia de los acreedores e inversores. La determinación legal de un capital mínimo –que actúa como cifra preventiva de retención incorporada como dato técnico al balance– junto a su integridad y mantenimiento exigen un esfuerzo que muchas veces no halla eco en el tráfico económico. El carácter formal y fijo del capital encorseta la gestión social, aumenta los costes y hace perder eficacia y competitividad empresarial sin que, como contrapeso, se desprenda una protección real del acreedor en la *praxis* societaria¹⁵⁸. En las palabras de ALONSO LEDESMA, “el instituto del capital social [...], con su cifra mínima exigida, no es más que una mera ilusión óptica de solvencia y garantía”¹⁵⁹. No es de extrañar que se asevere que el capital hace tiempo que ha entrado en “crisis”¹⁶⁰. “El instituto [del capital] se encuentra en estos momentos sumido en una profunda crisis que puede hacer de él una reliquia

158 Vid. ALONSO LEDESMA, C., “Propuesta de modificación de la Segunda Directiva de sociedades relativa a la constitución de la sociedad anónima y al mantenimiento y modificación de su capital”, *RdS*, nº 24, vol. 1, 2005, p. 512. Asimismo, léase: RODRÍGUEZ DÍAZ, I., “El fenómeno de la adquisición derivativa de acciones propias. La Directiva 2006/68/CE modificadora de la Segunda Directiva sobre el Derecho de sociedades y su incidencia en el ordenamiento jurídico español”, *RdS*, nº 27, vol. 2, 2006, p. 238, para quien “la vigente disciplina sobre el capital social [...] resta agilidad a la gestión social sin que cumpla en la práctica la función de protección de los acreedores que tradicionalmente se le ha asignado”. También, VELASCO SAN PEDRO, L. A., “La reforma de la asistencia financiera en Europa”, *Documentos de trabajo del Departamento de Derecho mercantil*, Universidad Complutense, nº 2006/5, diciembre 2006, p. 7. Por su parte, con un argumento de estricta eficiencia económica, ENRIQUES, L.; MACEY, J., “Creditors versus capital formation: The case against the european legal capital rules”, en *Cornell Law Review*, nº 86, 2001, pp. 1165 y siguientes, pondrían el acento en los costes asociados a las reglas europeas sobre el capital social.

159 Vid. ALONSO LEDESMA, C., “Propuesta...”, *op. cit.*, pp. 512-513, donde se citó, en la nota a pie de página nº 9, este estudio doctrinal: KÜBLER, F., “A comparative approach to capital maintenance: Germany”, en *European Business Law Review*, 2004, p. 1034.

160 Vid., por todos, ALONSO LEDESMA, C., “Algunas reflexiones sobre la función (la utilidad) del capital social como técnica de protección de los acreedores”, en *Estudios de Derecho de sociedades y Derecho concursal: Libro homenaje al Profesor Rafael García Villaverde*, Marcial Pons, octubre 2007, pp. 131-136; ESCRIBANO GÁMIR, R. C., “La Directiva 2006/68/CE, de 6 de septiembre, en materia de tutela de los derechos de crédito de los acreedores sociales frente a la reducción del capital social. Apuntes de una reforma anunciada”, *RdS*, nº 28, vol. 1, 2007, p. 168; RODRÍGUEZ DÍAZ, I., “El fenómeno de la adquisición derivativa...”, *op. cit.*, p. 238, quienes utilizarían la noción de “crisis”.

destinada a formar parte de un museo arqueológico del Derecho societario”, comentaría la citada profesora¹⁶¹. La “crisis” que acecha al capital o, en palabras menos dramáticas, su cuestionamiento no es nuevo, viene de lejos en el tiempo, pero se ha intensificado en los últimos tiempos a raíz de la búsqueda y el encuentro de otras alternativas¹⁶².

Sin un régimen de mantenimiento o integridad del capital, la tutela externa de los acreedores habría de venir sustentado en el siguiente trípode: primero, la transparencia financiera basada en los principios de información y veracidad contable; segundo, los deberes fiduciarios de los administradores, en el sentido de una estricta responsabilidad a cambio del gozo de libertad en sus actuaciones; y, tercero, los conocidos “test de solvencia” que impiden cualquier reparto a los socios si, con ello, queda amenazada de forma directa la solvencia empresarial y, en consecuencia, los intereses de los acreedores¹⁶³.

Habiéndose propuesto la no exigencia de capital mínimo para la existencia y subsistencia de la planteada sociedad simplificada, no habría necesidad de realizar aportaciones de capital. Los socios o, en la condición de unipersonalidad, el único socio no estaría/n obligado/s a hacer aportación patrimonial alguna. A su libre decisión quedaría aportar o no y, en caso de aportar, la forma, el tiempo y el valor de esa aportación. En dinero en efectivo, en créditos, en bienes materiales o inmateriales, en ejecución de obras, servicios prestados o a prestar podrían consistir, en un listado no tasado, las aportaciones decididas para las que no se requeriría, salvo acuerdo expreso en contrario, valoración mediante un informe de experto independiente.

El clásico principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes sería el que regiría tanto para la aportación como para la distribución de las ganancias que, en su caso, consiguiera la sociedad simplificada durante el curso de sus negocios. En el planteamiento que el proyecto de Guía Legislativa hace de la ERL-CNUDMI, el común acuerdo es el principio supremo y, a falta de él, la participación en igualdad en el patrimonio y en la distribución de las utilidades, pudiéndose aprobar por acuerdo de los miembros la cantidad, el tiempo y la forma (en efectivo o en bienes) de la distribución de los beneficios¹⁶⁴. Una

161 Vid. ALONSO LEDESMA, C., “Algunas reflexiones...”, *op. cit.*, p. 131.

162 Como tuvimos ocasión de desarrollar en: GARCÍA MANDALONIZ, M., “El cuestionado sentido...”, *op. cit.*, pp. 253-347.

163 Consúltase: ALONSO LEDESMA, C., “Propuesta...”, *op. cit.*, p. 512.

164 Recomendación n° 19 del proyecto de Guía Legislativa sobre la entidad de responsabilidad limitada de la CNUDMI, de 25 de julio de 2016, p. 10 (A/CN.9/WG.I/WP.99/Add.1)

norma imperativa existiría para la protección de los terceros, empero. Para su máxima protección contra una posible distribución indebida de utilidades, no podría haber distribución en caso de insolvencia o de balance negativo. También –se recuerda– la prueba del balance y la exigencia de la firma de declaración de solvencia fueron incluidas en la propuesta de Directiva de la sociedad unipersonal privada de responsabilidad limitada para garantizar “un elevado nivel de protección a los acreedores” y, por ende, la reputación de esa *societas unius personae* o SUP que hubiera podido contar con un capital social simbólico de un euro¹⁶⁵. Bajo esta estela de los test de balance y solvencia, a la sociedad simplificada ahora planteada por la CNUDMI no se le permitiría distribuir utilidades si, al hacer la distribución, no estuviera en condiciones de pagar las deudas en el momento de su vencimiento o si el activo total fuese inferior a la suma del total del pasivo¹⁶⁶. De contrariarse esta prohibición, la obligación de devolución del monto indebidamente distribuido recaería sobre los miembros que lo hubieran percibido¹⁶⁷. Una doble matización incorpora la Guía Legislativa, acto seguido: ni el pago de una remuneración razonable por los servicios prestados ni la suma adeudada de buena fe por la ERL-CNUDMI a alguno de sus miembros podría considerarse distribución de utilidades y, en consecuencia, no sería de aplicación la citada regla de la devolución.

4. PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO FEMENINO

El nuevo marco jurídico-societario meramente bosquejado tiene como sustento la flexibilidad y la sencillez tanto en la constitución como en la organización societaria para responder a las particularidades y los requerimientos de las empresas emergentes. La flexibilidad y la simplicidad conducen hacia la innovación. El enfoque legislativo innovador para la constitución de una sociedad que permita dar una óptima respuesta a las mujeres emprendedoras que van a desenvolver sus actividades empresariales en un entorno económico como el actual, cada vez más variable y acelerado, ha de trasladarse también a la organización interna de la sociedad que se constituye. Las ventajas de la flexibilidad y la simplicidad también han de poder evidenciarse en lo que a la configuración societaria se refiere. A ellas pueden unirse las inherentes al

165 Exposición de Motivos y artículo 16 de la Propuesta de Directiva de SUP de 9 de abril de 2014.

166 Recomendación nº 20 (pp. 10-11).

167 En la Recomendación nº 21 del proyecto (pp. 11-12).

empleo de las TIC en los órganos sociales, esto es, el órgano de administración y la junta general, en cuanto que estas modernas técnicas promueven la aceleración del tiempo, la facilitación de la forma y las funciones, y la desmaterialización del lugar¹⁶⁸.

Las características esenciales de la reforma innovadora que propone la CNUDMI en sus dos citadas Guías Legislativas son, de una parte, una inscripción registral electrónica eficaz con identificación *online* del titular real con el fin de reducir los costes y trámites administrativos en la constitución y, de otra parte, una sociedad con personalidad jurídica y responsabilidad limitada modulable en su organización interna, con objeto social general y sin capital social mínimo legal. Una vez identificados estos rasgos principales se agregarían otros rasgos complementarios. Complementarios que se sumarían al de sin capital mínimo legal serían el de sin valor nominal, el de sin efectiva aportación patrimonial y el de reforzamiento de la responsabilidad de los administradores para una adecuada tutela de los acreedores. En suma y en palabras de este organismo internacional¹⁶⁹: “Transparencia y rendición de cuentas, formas jurídicas flexibles y cláusulas de objetivos generales [...], reducción o eliminación de los requisitos de capital mínimo, utilización opcional de los servicios notariales, un sistema declarativo y una legislación clara”.

4.1. Con una “legislación clara”

Por una “legislación clara” aboga la CNUDMI¹⁷⁰; por una “legislación inte-

168 Como así comentáramos en: GARCÍA MANDALONIZ, M.; RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T., “La inquebrantabilidad del principio de unicidad en la Junta General”, *RCE*, n° 57, 2005, p. 64; aludiendo en su primera nota a pie de página al Informe WINTER, que huelga recordar que fue elaborado por el denominado “Grupo de Expertos de Alto Nivel en Derecho de Sociedades” y creado por la Comisión Europea en septiembre de 2001, en el marco de un Plan de Acción sobre Derecho de Sociedades impulsado por la Unión Europea. El Informe se publicaría, el 4 de noviembre de 2002, bajo el título: “*On a modern regulatory framework for Company Law in Europe*”.

169 Nota de la Secretaría de CNUDMI sobre las mejores prácticas de inscripción registral de empresas de 5 de septiembre de 2014, p. 25.

170 Conforme a las páginas 25 y 26 de la Nota de la Secretaría de CNUDMI sobre las mejores prácticas de inscripción registral de empresas de 5 de septiembre de 2014; o a la página 23 de la Nota de la Secretaría de 10 de agosto de 2015. También en los apartados XI y b), correspondientes a los párrafos 237 a 239, y en la Recomendación n° 56 de la Nota de la Secretaría de 10 de abril de 2018, pp. 76-77.

ligente” aboga la Comisión europea¹⁷¹. Las patas de la legislación inteligente están centradas en aligerar, simplificar y abaratar el Derecho hasta alcanzar una legislación clara y accesible¹⁷². A la claridad y la accesibilidad añadiríamos nosotros la movilidad. Sería una legislación “móvil” o “movible” por su aptitud para la fácil y ágil modificación (mediante acuerdos de los socios sin requerir la unanimidad) inherente a la flexibilidad emanante de la libertad de pactos reinante. La legislación inteligente –que ha de ser clara y accesible– sería dispositiva y de mínimos. Este enfoque legislativo habría de tomar en cuenta la evolución de la tecnología. La movilidad habría de suponer adaptabilidad a la vertiginosa evolución tecnológica bajo los principios generales de equivalencia funcional y neutralidad tecnológica¹⁷³.

Claridad, accesibilidad, movilidad o adaptabilidad serían los calificativos a acompañar a los Derechos societarios nacionales. Pero, para la hipótesis en que se atisbaran relevantes reticencias en la *praxis* para la revisión de los Derecho de sociedades internos en vigor en orden a insertar a la ERL-CNUDMI en los términos esbozados, convendría caracterizarla como una figura asociativa. En tal supuesto, sin alterar el Derecho codificado ni “descodificado” de sociedades mercantiles, convendría construir un Derecho independiente de “entidades” simplificadas con personalidad jurídica y responsabilidad limitada. La idea y querencia de la independencia no es propia sino apropiada del proyecto de Guía Legislativa de la ERL-CNUDMI. En ella se acentúa que no sería necesaria su vinculación con el Derecho de sociedades vigente y que, incluso, sería lógica su desvinculación¹⁷⁴. La innovación requeriría, más que reformulación, desconexión de los vigentes Derechos de sociedades.

Las características esenciales de la reforma que propone la CNUDMI para la “entidad” (que no “sociedad”) de responsabilidad limitada son concomi-

171 En la denominación de la Comunicación de la Comisión europea de 8 de octubre de 2010: “Normativa inteligente en la Unión Europea” (COM (2010) 513 final, 8 octubre 2010), donde se propuso caminar hacia una legislación inteligente que necesariamente había de ser clara y accesible (p. 9).

172 *Ibidem*, p. 9.

173 En el apartado D), titulado: “Un enfoque legislativo que tenga en cuenta la evolución de la tecnología”, correspondiente a los párrafos 244 y 245 de la reseñada Nota de la Secretaría de la CNUDMI de 10 de abril de 2018, p. 78, en coordinación con su Recomendación última, la n° 58.

174 Páginas 8-9 del Informe del Grupo de Trabajo I (Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas) sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (Viena, 3 a 7 de octubre de 2016).

tantes, en líneas generales, con algunas de las que en el pasado reciente planteó la Comisión europea para la sociedad unipersonal privada de responsabilidad limitada¹⁷⁵ (SUP), que fueron rechazadas. Para evitar el rechazo, la CNUDMI no plantea una “sociedad” sino una “entidad”. Omite con intención el término “sociedad” y emplea con consciencia –desde el *nomen iuris*– el término neutro de “entidad” para visibilizar la separación que pretende. Bajo el principio de “neutralidad terminológica” que busca consolidar no habría “sociedades” sino “entidades”, no habría “socios” sino “miembros”. Procede del vocablo latino “*entitas*”, una “entidad” es –en el cuarto significado que la Real Academia Española de la Lengua ofrece– un “ente o ser” y –en el primero de los significados ofrecidos– una “colectividad considerada como unidad y, en especial, cualquier corporación, compañía o institución, tomada como persona jurídica”. Entidad de naturaleza societaria es la compañía mercantil; entidad de naturaleza no societaria sería la ERL-CNUDMI.

Desconectado de los vastos contornos del vigente Derecho de sociedades se diseñaría, entonces, un Derecho de entidades de responsabilidad limitada. Serían dos compartimentos estancos que correrían paralelos, aunque creemos que el Derecho de entidades simplificadas guardaría reminiscencias del Derecho de sociedades del que trataría de desprenderse para independizarse, y al que tendría que retornar de modo supletorio para cubrir sus lagunas. En cualquier caso, el propuesto por la CNUDMI sería un Derecho de entidades empresariales de constitución y organización simplificada que gozarían de personalidad jurídica y de responsabilidad limitada con objeto social general y que, en función de la libertad contractual, tendrían o no ánimo de lucro, capital social y aportes patrimoniales.

El Derecho de las entidades de responsabilidad limitada perseguiría encauzar y no encallar la iniciativa empresarial. Se instauraría, a modo de atalaya, como legislación vigilante e incitante, defensora y fortalecedora de los diversos sectores empresariales, desde los más tradicionales hasta los más técnicos y tecnológicos. Con los caracteres expresados sería de utilidad para

175 ESTEBAN VELASCO, G., “La Propuesta de Directiva sobre la “*Societas Unius Personae*”: las cuestiones más polémicas”, *El Notario del Siglo XXI: Revista del Colegio Notarial de Madrid*, n° 60, marzo-abril 2015, pp. 148-151, resumió las características principales de la SUP en: “simplificación administrativa en la creación de empresas; apertura a la electrificación del proceso de fundación de la sociedad; revisión de la función del capital social; libre elección del domicilio social registral; flexibilización del funcionamiento y nuevas vías para la tutela de los acreedores reforzando la responsabilidad de los administradores”.

las emprendedoras que se abren camino en los mercados exteriores sin merma de los interiores, en lo que viene denominándose como “glocalización”¹⁷⁶. En la estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador que la Comisión propusiera en marzo de 2010 para la “Europa 2020”¹⁷⁷, la iniciativa sobre una política industrial para la era de la mundialización¹⁷⁸ acentuó la demanda de una base empresarial capaz de competir y triunfar en el mercado globalizado o, mejor dicho, “glocalizado”. Porque “las empresas nuevas y jóvenes representan un ingrediente clave para la recuperación rica en empleo”¹⁷⁹, el enfoque primordial ha de ser configurar y estimular un ecosistema jurídico que les permita perdurar y crecer¹⁸⁰. Hacia la consecución de esta aspiración –planteada en el Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020¹⁸¹– habrían de encauzarse los esfuerzos de los legisladores nacionales en el terreno mercantil, simultáneamente complementados en el campo administrativo con la dotación de mayor rapidez y sencillez en la solicitud y concesión de las licencias pertinentes para dar inicio a las actividades empresariales.

Con la vista puesta en la configuración de un ecosistema jurídico capaz de apoyar a las “*start-up*” a emerger como “*scale-up*”¹⁸² en esta era vivida –y por vivir– de la conexión y la descentralización, discurre en el ámbito jurídico-privado el trayecto marcado por las Guías Legislativas de la CNUDMI sobre la entidad de responsabilidad limitada y los principios fundamentales de la inscripción registral de las empresas que en la presente investigación ha sido tan solo dibujado. Este doble trayecto se muestra en buena sintonía con la

176 Como suma de las expresiones “globalización” y “localización”.

177 COM (2010) 2020, 3 marzo 2010.

178 Esta iniciativa emblemática fue planteada en las páginas 19 y 20 de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: “Plan de Acción sobre emprendimiento 2020. Relanzar el espíritu emprendedor en Europa” (COM (2012) 795 final, 9 enero 2013).

179 En la literalidad de la página 29 del Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020.

180 El Plan de Acción sobre emprendimiento 2020 fue plenamente consciente de que “a las empresas les falta a menudo un ecosistema que les permita crecer” (p. 11).

181 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: “Plan de Acción sobre emprendimiento 2020. Relanzar el espíritu emprendedor en Europa” (COM (2012) 795 final, 9 enero 2013), 36 pp.

182 La expresión “*scale-up*” hace alusión a las empresas “gacelas” de alto crecimiento o con gran tasa de empleo (superior al 20%) con más de tres años de vida en el mercado y con perdurabilidad en el tiempo, en la definición que de ellas ofrece el *Scale-up Institute* del Reino Unido y la OCDE.

senda que el Parlamento Europeo y el Consejo trataron de trazar (en trazo frustrado) para una sociedad unipersonal privada con responsabilidad limitada que avivara el emprendimiento transfronterizo en una época cada vez más interconectada y que tratan ahora de avivar, bien que en exclusiva en lo que a la constitución electrónica se refiere, con la propuesta de Directiva de 25 de abril de 2018, de modificación de la Directiva (UE) 2017/1132 para la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades, formando parte del “*Company Law Package*”.

No es momento en estos tiempos de rápido avance tecnológico de regazos ni caparazones jurídicos. La salida para una carrera rápida vendría marcada por los trabajos (proyectados) tanto de las instituciones comunitarias como del órgano jurídico de Naciones Unidas para el Derecho mercantil internacional. La meta final llegaría con la aprobación y consolidación en los ordenamientos jurídicos internos de una normativa susceptible de encauzar y no trabar el emprendimiento femenino. Tomando prestadas las palabras del Sr. BARROSO, cuando fuera Presidente de la Comisión europea: “Para lograr un futuro sostenible, debemos mirar ya más allá del corto plazo. [...] Tenemos las nuevas herramientas y la nueva ambición. Ahora necesitamos hacer que se haga realidad”¹⁸³.

4.2. Con incentivos para la formalización

Para que se haga realidad el empoderamiento económico femenino es necesario, pero no es suficiente, el derrumbamiento de las barreras legales. Han de caer también los muros financieros, educativos, culturales y sociales. Ha de promulgarse un régimen legal “sencillo y previsible”, en los calificativos de la primera de las Guías Legislativas objeto de atención y examen¹⁸⁴. Junto a una ley “sencilla y directa”¹⁸⁵ han de promocionarse incentivos para la inscripción empresarial¹⁸⁶. El sistema electrónico de inscripción registral “transparente y fiable” y la forma jurídica empresarial sencilla y flexible han de acompañarse y acompasarse del favorecimiento de las empresas inscri-

183 Estas palabras las tomamos prestadas del Prefacio de la Estrategia “Europa 2020” (pp. 2-3).

184 Página 14 de la versión de 10 de abril de 2018.

185 *Ibidem*.

186 El párrafo 23 (p. 12) de la Nota de la Secretaría de CNUDMI de 10 de abril de 2018 alude a la necesidad de incentivos para la inscripción empresarial, añadiendo un listado ejemplificativo que, en parte, transcribiremos, a continuación, en el texto principal.

tas al acceso a la financiación bancaria y alternativa a la bancaria, de una tributación sencilla y favorable, de la orientación y asistencia para la elaboración del plan de negocio, de una mentorización y asesoría empresarial de calidad, o del suministro de infraestructura tecnológica a bajo coste¹⁸⁷. Estas y otras medidas asesoras, financieras y fiscales son necesarias, pero tampoco son suficientes. Previamente se precisan medidas educativas (de educación empresarial y de educación financiera) porque a igual nivel de educación menor es la brecha de género empresarial¹⁸⁸. Una vez que se alcanza igual nivel de educación se requiere vencer el miedo a fallar (o “*fear of fail*”). A mayor miedo al fracaso, menor intención de emprender. Las mujeres tienen mayor aversión al riesgo¹⁸⁹. La aversión al riesgo y el temor a fallar paralizan más a las mujeres que a los hombres ante idéntica visión de oportunidades¹⁹⁰. Pese a los altos niveles educativos de las mujeres en las Economías más desarrolladas e innovadoras del mundo, no se creen con capacidad para emprender¹⁹¹. Por ello, se observa la necesidad de establecer o fortalecer ecosistemas de emprendimiento femenino¹⁹². De cara a potenciar sus potencialidades, las emprendedoras requieren una atención y un apoyo especial. En un ideal ecosistema de soporte específico para las emprendedoras destacarían no solo óptimas medidas financieras bancarias y extra-bancarias sino una “red de mentoras”, con expertas que proporcionasen tutoría, formación, asesoramiento y orientación práctica para la viabilidad y productividad de los negocios; así como un “club de líderes emprendedoras”¹⁹³ para el refuerzo de la cultura del emprendimiento femenino y la superación de las murallas culturales y sociales. Un ecosistema, en definitiva, en el que quienes quieran crear aprendan a crear y a creer en ser capaces de crear.

187 También el documento de la CNUDMI sobre la creación de un entorno jurídico propicio para el funcionamiento de las MIPYME contemplaría estos y otros incentivos estatales para “atraer a las MIPYME para que funcionen en el sector de la Economía formal” (pp. 13-14).

188 Vid. GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, *Special Report...*, *op. cit.*, p. 7.

189 *Ibidem*, p. 45.

190 *Ibidem*.

191 Vid. CEPYME, “Aumenta el número de mujeres emprendedoras...”, *op. cit.*

192 *Ibidem*.

193 Tomando como analogía, en particular, la red de mentoría y el “club de líderes ciberemprendedores” y, en general, el ecosistema de ciberemprendimiento planteado en el Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020, pp. 15-17.

5. BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV., “¿Existe una una función notarial europea?”, *El Notario del Siglo XXI*, nº 75, septiembre-octubre 2017.
- ALONSO LEDESMA, C., “Propuesta de modificación de la Segunda Directiva de sociedades relativa a la constitución de la sociedad anónima y al mantenimiento y modificación de su capital”, *RdS*, nº 24, vol. 1, 2005.
- “Algunas reflexiones sobre la función (la utilidad) del capital social como técnica de protección de los acreedores”, en *Estudios de Derecho de sociedades y Derecho concursal: Libro homenaje al Profesor Rafael García Villaverde*, Marcial Pons, octubre 2007.
- ÁLVAREZ ROYO-VILLANUEVA, S., “Presentación crítica de la Propuesta de la Comisión Europea sobre digitalización y operaciones transfronterizas (traducción del post en *European Law Blog*)”, *Blog Hay Derecho*, 27 junio 2018.
- BROSETA PONT, M., “Determinación e indeterminación del objeto social en la Ley y en los Estatutos de las sociedades anónimas españolas”, *RDN*, 1970.
- CEPYME, “Aumenta el número de mujeres emprendedoras, reduciendo la brecha con respecto a los hombres”, *CEPYMENews*, 18 enero 2018.
- ENRIQUES, L.; MACEY, J., “Creditors versus capital formation: The case against the european legal capital rules”, *Cornell Law Review*, nº 86, 2001.
- ESCRIBANO GÁMIR, R. C., “La Directiva 2006/68/CE, de 6 de septiembre, en materia de tutela de los derechos de crédito de los acreedores sociales frente a la reducción del capital social. Apuntes de una reforma anunciada”, *RdS*, nº 28, vol. 1, 2007.
- ESTEBAN VELASCO, G., “La Propuesta de Directiva sobre la “*Societas Unius Personae*”: las cuestiones más polémicas”, *El Notario del Siglo XXI: Revista del Colegio Notarial de Madrid*, nº 60, 2015.
- EUROPEAN COMMISSION ENTERPRISE DIRECTORATE GENERAL, *Benchmarking the administration of business start-ups*, Centre for Strategy & Evaluation Services, January 2002.
- FERNÁNDEZ HERGUETA, R., “El sector público y el uso de la *blockchain*”, PREUK-SCHAT, A. (coord.), *Blockchain: la revolución industrial de Internet*, Ediciones Gestión 2000, 2017.
- GARCÍA, E., “*Blockchain*. ¿De verdad es importante?”, *Clifford Chance Advisor*, nº 7, 2017.
- GARCÍA MANDALONIZ, M., “El cuestionado sentido del régimen jurídico del capital social”, en HIERRO ANIBARRO, S. (dir.), *Simplificar el Derecho de sociedades*, Marcial Pons, 2010.
- “Hacia un sistema único de constitución de sociedades mercantiles electrónico y eficiente”, en MADRID PARRA, A. (dir.), *Derecho mercantil y tecnología*, Aranzadi, 2018.

- GARCÍA MANDALONIZ, M.; RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T., “La inquebrantabilidad del principio de unicidad en la Junta General”, *RCE*, nº 57, 2005.
- GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, *Special Report. Women`s entrepreneurship 2015*, GEM, 2015.
- ____ *Women`s entrepreneurship 2016/2017 Report*. GEM, 2017.
- GONZÁLEZ-MENESES ROBLES, M., *Entender blockchain: una introducción a la tecnología de registro distribuido*, Aranzadi, junio 2017.
- IBÁÑEZ JIMÉNEZ, J. W., *Blockchain: primeras cuestiones en el ordenamiento español*, Dykinson, 2018.
- ____ *Derecho de Blockchain y de la tecnología de registros distribuidos*, Aranzadi, 2018.
- ILLESCAS ORTIZ, R., “La sociedad anónima de objeto plural”, en *AAMN*, T. XXXIV, Editoriales de Derecho Reunidas, 1995.
- INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, *Task manager`s ICT toolkit for designing and implementing online registry applications*, IFC, Mar 3, 2015.
- JORDÁ GARCÍA, R., “Empresas de economía social y constitución telemática de sociedades”, en PARDO LÓPEZ, M^a M.; GÓMEZ MANRESA, M. F. (dir./coord.), *Economía social y Derecho. Problemas jurídicos actuales de las empresas*, Comares, 1 marzo 2014.
- KÜBLER, F.: “A comparative approach to capital maintenance: Germany”, en *European Business Law Review*, 2004.
- LEWIN, A. (et al.), *Implementing electronic business registry (e-BR) services. Recommendations for policy makers based on the experience of EU accession countries*, The World Bank, June 2007.
- LUCINI MATEO, A., “El traslado internacional del domicilio social dentro de la Unión Europea, a debate en el IV Congreso Notariado Europeo”, *El Notario del Siglo XXI*, nº 75, septiembre-octubre 2017.
- ____ “El documento público notarial en la perspectiva de la digitalización del Derecho societario europeo”, *El Notario del Siglo XXI*, nº 77, enero-febrero 2018.
- MARÍN CALERO, C., “Ley de la sociedad limitada nueva empresa”, *RJN*, nº 47, julio-septiembre 2003.
- MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD, *Retrato de la PYME, a 1 de enero de 2017*, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2018.
- OLAVARIA IGLESIA, J., “Artículo 132. Objeto social”, en BOQUERA MATARREDONA, J. (dir.), *La Sociedad Limitada Nueva Empresa. Comentarios a los artículos 130 a 144 y a las Disposiciones adicionales 8^a a 13^a de la LSRL*. Aranzadi, 2003.
- PAREJA, A. (et al.), *La gestión de la identidad y su impacto en la economía digital*, Banco Interamericano de Desarrollo, documento para discusión nº IDB-DP-529, agosto 2017.

- PREUKSCHAT, A. (coord.), *Blockchain: la revolución industrial de Internet*, Ediciones Gestión 2000, 2017.
- ____ *Comunidad blockchain. El futuro de la criptoeconomía descentralizada y las ICO's*, Íñigo Molero editor, 2018.
- REGISTRADORES DE ESPAÑA, *Estadística Mercantil. Ejercicio 2016*, 2017,
- ____ *Estadística Mercantil. Ejercicio 2017*, 2018
- RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., “Determinación estatutaria del objeto social”, en ALONSO UREBA, A. (et al.) (coords.), *Derecho de sociedades anónimas. I. La fundación*, Civitas, 1991.
- RODRÍGUEZ DÍAZ, I., “El fenómeno de la adquisición derivativa de acciones propias. La Directiva 2006/68/CE modificadora de la Segunda Directiva sobre el Derecho de sociedades y su incidencia en el ordenamiento jurídico español”, *RdS*, nº 27, vol. 2, 2006.
- SAPENA DAVÓ, F., “La Ley de la Sociedad Limitada Nueva Empresa”, *RJCV*, nº 7, 2003.
- TAPSCOTT, D., *La revolución blockchain. Descubre cómo esta nueva tecnología transformará la Economía global*, Deusto, febrero 2017.
- VELASCO SAN PEDRO, L. A., “La reforma de la asistencia financiera en Europa”, *Documentos de trabajo del Departamento de Derecho mercantil*, Universidad Complutense, nº 2006/5, diciembre 2006.
- WORLD BANK GROUP, *Women, business and the law 2016. Getting to equal*, The World Bank, 2015.
- ____ *Women, business and the law 2018*, The World Bank, 2018.
- YANES YANES, P., “La sociedad limitada en la economía sostenible. Notas sobre una propuesta equivocada de un reformador impaciente”, *CDyC*, nº 54, 2010.